UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL

HUMANITARIO ANTE ORGANISMOS, CORTES Y TRIBUNALES INTERNACIONALES

EL CASO DEL MOVICE Y LA SITUACION DE LAS VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO: ENTRE LA EMANCIPACION, LA HEGEMONIA Y LA REIVINDICACION.

PRESENTADO POR:

Jorge Eduardo Zamudio Pulido

TUTOR: Dr. Jorge Carvajal

RESUMEN

Colombia ha estado sumergida en lagos de violencia y sangre desde la mitad o antes del siglo XX. Esos arrabales de violencia, muerte y dolor han generado innumerables víctimas, que han cargado sosegadamente con el peso del olvido, del sufrimiento y del abandono. Esas víctimas deben ocupar espacios de privilegios y autodeterminación en la construcción del futuro de este país. Los Movimientos Sociales que agrupan y representan la diversidad de esas víctimas, deben luchar por materializar o reivindicar los Derechos Fundamentales de éstas, pero, además, deben luchar por romper espacios tradicionales de Poder y Hegemonías para que las víctimas pueden construir, establecer o determinar visiones alternativas de la vida, de la economía, del Estado, del Derecho y de la Sociedad.

PALABRAS CLAVES

Derechos Fundamentales, Constitución Política, Movimientos Sociales, Violencia, Fuerzas Militares, Estado, Víctimas, Conflicto armado, Justicia, Verdad, Reparación Integral, Garantías de no Repetición, Sociología Jurídica, Emancipación, Hegemonía, Contra-Hegemonía, Reivindicación.

EL CASO DEL MOVICE Y LA SITUACION DE LAS VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO: ENTRE LA EMANCIPACION, LA HEGEMONIA Y LA REIVINDICACION

Índice

INTRODUCCION	5
CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. HISTORIA EN AMÉRICA LATINA	8
1. Introducción general al capítulo	8
2. La constitución del 91: Reconfiguración del Sistema judicial para la defensa de Derechos Fundamentales	8
3. Los movimientos sociales: Nociones básicas para su comprensión.	13
4. Los Movimientos Sociales en América Latina: Movimiento campesino, Movimiento obrero, Movimientos de clase media y Movimientos estudiantiles.....	20
5. Conclusiones parciales	22
CAPÍTULO II: EL CASO DEL MOVICE: AGENTE DE CAMBIO	22
1. Introducción general al segundo capítulo	22
2. Conflicto armado en Colombia y surgimiento del MOVICE	24
3. Fuerza Pública y Conflicto Armado en Colombia.....	26
4. Primeros Pasos del MOVICE.....	29
5. Estrategias del MOVICE; acciones para la materialización de Derechos a la verdad, Justicia, reparación integral, Memoria y garantías de no repetición.....	34
CAPITULO III CIERRES SIMBÓLICOS, REIVINDICACIONES Y DIFICULTADES DEL MOVICE.....	37
1. Introducción General al Capítulo.....	37
2. Cierres Simbólicos.....	39
3. La Ley 975 de 2005 o ley de justicia y paz.	40
4. Cierre simbólico en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.....	51
5. Reivindicaciones del MOVICE	63
6. Perdidas y dificultades actuales del MOVICE.	67
7. Conclusiones parciales	70
CAPITULO IIII: HEGEMONIA, EMANCIPACIÓN Y REIVINDICACIÓN	71
1. Introducción general al capítulo	71
2. Concepciones generales de sociología jurídica	72
3. Hegemonía, Emancipación y Reivindicación.....	75

3.1. Hegemonía y Contra-hegemonía.....	75
3.2. Emancipación	78
3.3. Reivindicación.....	80
4. Conclusiones parciales	82
CONCLUSIONES	84

INTRODUCCION

Para la comprensión del contexto social colombiano se requiere esfuerzos incontenibles, diversas ópticas que generen aproximaciones para el entendimiento de los diversos fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos y jurídicos vigentes en la realidad colombiana. El entorno social colombiano está compuesto de una diversidad de elementos conflictivos, ambiguos y muy diferentes que dificultan y acomplejan una comprensión sintética de la realidad colombiana. Dentro de todos esos fenómenos, la sociedad colombiana se ha construido paulatinamente sobre la vigencia de un conflicto armado interno que se extiende por un término de 60 años. Debido a esto, la sociedad colombiana se ha erigido sobre la ausencia de aquellos individuos que han sufrido las consecuencias directas del conflicto armado interno colombiano. El conflicto armado interno, conlleva intrínsecamente un retardo político y social que condena al país a subsumirse en la indiferencia de las consecuencias y efectos de la guerra, inclusive divide radicalmente posiciones cuando se vislumbra una tenue luz de esperanza.

Dentro de los nuevos aires de esperanza que pretenden abrir nuevos espacios de reconciliación y diálogos, se encuentran los Movimientos Sociales que buscan reivindicaciones culturales, sociales, económicas, jurídicas, equidad y notoriedad. Son aquellos Movimientos que existen con el propósito de servir a su objetivo, sobreponiéndose a aquellos obstáculos tendientes a fragmentar su razón de ser. Son Movimientos Sociales que han contribuido a visibilizar el discurso de los Derechos Humanos y llevarlos a un nivel de importancia y divulgación para que puedan ser comprendidos y defendidos en su magnitud.

Bajo los anteriores preceptos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (De ahora en adelante MOVICE) cumple con una labor estoica y complicada: Que las víctimas de la población civil por parte de agentes o instituciones estatales sean reconocidas y tratadas bajo principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. Es dable comprender la connotación que representa el concepto Víctima para el MOVICE, ya que éste asume el carácter de víctima de manera general, comprendiendo todas aquellas personas que han sufrido o sufrieron hechos violatorios de Derechos Humanos por parte del Estado colombiano.

La presente investigación tiene como objetivos analizar la importancia del MOVICE y su influencia en la configuración de Derechos en el ordenamiento interno colombiano, o lo que se denomina en este trabajo “Cierres simbólicos del MOVICE”. Lo anterior para determinar si las acciones del MOVICE representan patrones de sociología jurídica de Hegemonía, Reivindicación o Emancipación. Para ello, la investigación se encuentra dividida en cuatro grandes bloques o capítulos que se exponen a continuación:

En el primer bloque, como primera medida se harán breves consideraciones generales sobre el papel de la Constitución colombiana de 1991 en materia de Derechos humanos. En la segunda subdivisión del título 1 se indagará en los orígenes primarios del concepto “Movimiento Social”, qué se entiende por Movimiento Social, cuáles son los rasgos o características generales de los Movimientos Sociales. En tercera instancia se examinarán otros tipos de Movimientos sociales que han desarrollado funciones para resistir opresiones de carácter estatal y luchar por reivindicaciones de carácter político, cultural o económico en Latinoamérica.

En el segundo bloque se contextualizará en el caso de interés, es decir, el estudio y análisis del MOVICE, será indispensable comprender y abordar los inicios del MOVICE, sus objetivos y metas de transformación social; posteriormente se analizará la relación entre la fuerza pública y

el conflicto armado interno; para finalizar con las principales estrategias del MOVICE desarrolladas para materializar los Derechos Fundamentales de las Víctimas.

En el tercer capítulo se intentará definir qué se entiende por Cierres Simbólicos, y cuál es la importancia de los Cierres Simbólicos en el fortalecimiento institucional del MOVICE. Los Cierres simbólicos representan la manera que ha participado el MOVICE en la codificación de dos leyes transcendentales para la protección de las víctimas en Colombia: Ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) y Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011). En los apartados finales de este capítulo se hará mención a los principales logros del MOVICE y a las diversas dificultades a las que se enfrenta.

En el cuarto y último bloque se abordarán nociones generales de Sociología jurídica para la comprensión de los conceptos de Emancipación, Reivindicación y Hegemonía. Esto será esencial para evaluar si las funciones y acciones que desarrolla el MOVICE representan luchas Emancipatorias o Hegemónicas.

Como conclusiones finales, se realizará una exposición sucinta sobre los ámbitos temáticos que en el trabajo se abordaron y las diversas consideraciones personales del autor de este trabajo de investigación.

Se debe reconocer que los temas tratados en esta tesis requieren grandes extensiones para su desarrollo, por lo que el presente trabajo se ha limitado a exponer de forma sucinta y breve los principales fenómenos que a juicio del autor se ven relacionados con el MOVICE en Colombia.

CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. HISTORIA EN AMÉRICA LATINA

1. Introducción general al capítulo

Dentro de los diversos objetivos que se han planteado para el desarrollo de esta tesis, el primer capítulo intentará contextualizar al lector dentro los diversos fenómenos sociales, políticos y jurídicos que han estimulado el surgimiento de grupos o Movimientos sociales. En este capítulo se abordará como primera instancia: la Constitución política de 1991, se realizarán breves comentarios sobre los principales cambios que introdujo el texto Constitucional y que guardan relevancia con el objeto de estudio abordado en esta tesis. Como segunda instancia, se intentará contextualizar y definir de manera general qué son los Movimientos Sociales, aunque se abordé de manera breve, es necesario definir qué se entiende por este concepto para el posterior desarrollo de los subsiguientes temas. En tercera instancia, se comprenderán algunas tradiciones de Movimientos Sociales en América Latina, cuáles fueron los fundamentos y orígenes de los diversos Movimientos Sociales en América Latina, todo esto se definirá y tratará de manera generalizada. Finalmente, se sintetizarán las principales ideas desarrolladas en el transcurso de este capítulo para dar seguimiento al segundo capítulo de este trabajo.

2. La constitución del 91: Reconfiguración del Sistema judicial para la defensa de Derechos Fundamentales

La Carta Constitucional de 1991 aloja dentro de sí una gran contradicción, pues por una parte es una constitución aspiracional (expresaba el deseo de una sociedad futura mejor y más justa - progreso social-) y por el otro es un acuerdo o convenio de ideologías políticamente opuestas.

La gran contradicción subyace en que la proyección gubernamental de la época buscaba la consolidación del mercado neoliberal guiado por la apertura económica, mientras que, por otro lado, la corriente más izquierdista del momento creía en la obligatoriedad de la inclusión social y en la exigencia de creación de nuevas instituciones de rango constitucional, que buscaran el orden en los aspectos económicos, sociales y políticos (Puga, 2012). Dentro de esa contracción propia del momento, se ideó un sistema que revalorará el papel del Sistema Judicial en la garantía y protección de los Derechos Humanos, de ahí que se concebía al juez como actor esencial para la defensa y protección y materialización de los Derechos fundamentales consagrado en la Constitución. En términos de dos tratadistas en la materia, Saffon y García (2011) afirman:

La noción o concepción de Constitución es clave para valorar la protección judicial de los derechos sociales y su potencialidad para producir cambio social. En efecto, dependiendo del alcance y de los efectos que uno crea que una Constitución tiene y debería tener, uno tenderá a ser más o menos crítico con respecto a los cambios sociales que el activismo judicial en materia de derechos sociales puede o no producir (pág. 75)

De tal suerte que la Constitución colombiana de 1991 es pionera en su estilo vanguardista en pro de los Derechos Humanos. Esa labor, aunque determina la funcionalidad propia del Estado Social de Derecho, quedó en manos del poder judicial, creando una Corte Constitucional que velara por el respeto y la Defensa de los Derechos Humanos, y la supremacía de las diversas expresiones constitucionales contenidas en la Carta Magna.

El reconocimiento constitucional de nuevos derechos extendió las probabilidades de control constitucional-judicial, al fortalecer el poder judicial frente a los demás poderes y al consagrar derechos constitucionales con el objetivo de aumentar el espectro político de aquel entonces.

Junto con el reconocimiento de derechos de segunda y tercera generación, se garantizaron aspiraciones sociales y se contrarrestaron posibilidades de dictaduras o absolutismos

La gran mayoría de estos derechos fueron incluidos en la Carta Política de 1991, con el respeto irrestricto de tratados internacionales sobre diversos Derechos Humanos. Tal propagación de derechos representó no sólo la ampliación de nuevas pluralidades políticas, sino también nuevos desafíos para nuevos marcos jurídico creados a partir de la asamblea constituyente de aquel momento.

Todas estas aspiraciones liberales de la Constitución de 1991, fueron en gran medida opacadas por la clara predilección del presidencialismo absolutista. En este presidencialismo absolutista primaba la ampliación de las libertades económicas, liberalización del mercado, privatizaciones etc., y se dejaba de lado las grandes aspiraciones de la nueva Constitución, tornándose de difícil cumplimiento o letra muerta el amplio catálogo de nuevos derechos que los constituyentes estipularon. Esto obligó a que el respeto y aplicación de los Derechos Humanos se generara mediante el activo rol de los Tribunales Constitucionales y no mediante el normal desempeño de las otras ramas del poder. La defensa de estos nuevos derechos quedo en manos de los jueces constitucionales, adquiriendo así el sistema judicial, un rol preponderante en la defensa de los Derechos Humanos.

Ante estos jueces constitucionales se acudió regularmente para demandar y controlar los progresivos errores de instituciones estatales que ejecutaban y diseñaban políticas sociales. Una variedad de estas demandas y solicitudes ante jueces constitucionales constituyen un cambio de paradigma, en el cual los individuos adquieren cierta defensa de derechos por la vía judicial. El cambio de paradigma es que con anterioridad los jueces no se pronunciaban sobre materias y asuntos relacionados con derechos humanos (vía de tutela), debido a ello las personas que

acudían a los estrados judiciales veían insatisfechas sus aspiraciones de justicia. Luego del cambio de paradigma constitucional, se podría obtener por lo menos, la posibilidad de que un juez constitucional vía de tutela reconociera la violación de Derechos Humanos y exhortara la toma de medidas para la garantía o respeto de estos derechos.

A pesar del cambio de paradigma y la relación más directa entre los ciudadanos y los jueces constitucionales, ciertos juristas seguían o siguen anclados a antiguos patrones de litigio judicial, siempre dando mayor importancia a la parte formal que a la sustancial, dejando de lado el verdadero sentido de derechos constitucionales y usándolos como herramientas de negociación, dando mayor valor a aquellos argumentos surgidos de su práctica sin analizar el verdadero sentido que se quiso alcanzar en la nueva normatividad¹. Es decir que todo abogado que quería o quiere ganar un caso, permea su razonamiento y exposición del mismo con su preferencia política y posición personal, dejando de lado la versión de los actores involucrados, y aplicando su visión casi exclusivamente.

En consonancia con las nuevas aspiraciones del texto constitucional, se busca que todos los miembros de la sociedad tengan posibilidades de participar en las decisiones de carácter político que las afectan. Si la Constitución acercó la relación entre ciudadanos y el poder Constitucional, no es dable concebir que tecnicismos jurídicos excluyan a los actores sociales en la configuración de los espacios de la vida jurídica, social y política del País.

¹ “En efecto, por un lado, la tradición jurídica liberal, encarnada en una dogmática formalista, produce aún el discurso más eficiente para triunfar en una disputa judicial.” Que los que legislan se resistan a cambiar junto con el contexto en el cual se deben desarrollar las leyes, ha llevado a años de atraso judicial en Colombia, en donde aún pareciera tener más importancia la clase de persona que busca la justicia, que el fin mismo de una disputa judicial. (Puga, 2012)

Debido a las nuevas dinámicas que se desligaron de la Constitución política de 1991, han surgido Movimientos Sociales que pretenden establecer mecanismo de acción y relación directa entre el Estado y los colectivos sociales que estos Movimientos representan. Lo que se puede desligar del accionar de estos Movimientos y de sus ideales y funcionamiento es la búsqueda incesante de garantías y beneficios para que los diversos actores de la sociedad colombiana puedan incidir en cambios dentro del sistema judicial, ejecutivo y legislativo. Todas estas posibilidades de participación de los Movimientos o actores Sociales en las toma o ejecución de medidas que afecten sus realidades o situaciones, deben en gran medida su desarrollo a los marcos constitucionales instaurados durante la vigencia de la Constitución de 1991.

Es por ello que se puede afirmar que la Constitución Política de 1991 sentó las bases para una “nueva cultura jurídica” en Colombia (López) caracterizada, ya no por un único paradigma (positivismo), sino por una amplitud de prácticas y teorías que, desde distintas posiciones, van a redefinir y entender el texto constitucional y su aplicación real. Dentro de estas teorías se destacan en Colombia: la sociología jurídica, la teoría jurídica y la filosofía del derecho (Mejía Quintana).

Dentro de los nuevos marcos constitucionales instaurados por la Constitución de 1991, y dentro del cambio de paradigma que supone la redefinición del sistema judicial para la garantía y defensa de Derechos Humanos, los Movimientos Sociales adquieren grandes espacios de participación, acción y defensa para el desarrollo y ejecución de sus funciones. Dentro del amplio catálogo de derechos que dispone la Constitución política y todos aquellos tratados de Derechos Humanos que por vía del bloque de constitucionalidad integran el sistema de Derechos Humanos colombianos, los Movimientos Sociales adquieren herramientas jurídicas y políticas

para recodificar el papel de los colectivos o grupos sociales que ellos representan, en el diseño, elaboración y aplicación de políticas públicas y leyes en los que ellos se vean afectados.

Se puede afirmar que la Constitución Política de 1991 creó condiciones jurídicas favorables para el accionar institucional de los Movimientos Sociales. De esta forma resulta positivo la recodificación del Sistema Judicial para la defensa activa y funcional de los Derechos Fundamentales. Por lo anterior se hizo necesario realizar breves comentarios sobre la Constitución de 1991 y la reconfiguración del Sistema Judicial.

En el siguiente subcapítulo, se intentará generar aproximaciones para la comprensión de lo que significan movimientos sociales.

3. Los movimientos sociales: Nociones básicas para su comprensión.

Siguiendo la línea argumentativa anteriormente expuesta. Bajo el manto de las nuevas posibilidades constitucionales que supuso el cambio de paradigma constitucional en Colombia, los Movimientos Sociales se convierten en expresiones para el ejercicio de poder, no de carácter excluyente, sino como una expresión democrática de los ciudadanos organizados por medio de estas asociaciones. Estas asociaciones buscan la capacidad de decisión y respeto a la pluralidad de opiniones de cada uno de los colectivos o miembros que ella se ven representadas, tal y como lo resumió en una frase el gran Estanislao Zuleta (2003) “afirmar la riqueza irremplazable de la multiplicidad de iniciativas, pensamientos, convicciones y visiones del mundo”

Ahora bien, se deben analizar profundamente qué son los movimientos sociales, para ello acudimos a diversos autores o autoras que han intentado conceptualizar la riqueza de este concepto, por ejemplo, Elizabeth Jelin (1986) define los movimientos sociales como:

Los movimientos sociales son aquellas acciones colectivas con alta participación de base que utilizan canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social. (página)

La descripción de Elizabeth reconoce y puntualiza el carácter independiente y autónomo de los movimientos sociales, la pluralidad o variabilidad en sus bases y el reconocimiento de esta diversidad en la constitución y operabilidad de los Movimientos Sociales. Pero la autora también hace mención a la labor activa que desarrollan estas asociaciones para la materialización y lucha de los diversos derechos que en ellas se concretizan. Los movimientos sociales son así, colectividades autónomas de diversos grupos sociales que accionan o luchan por el respeto o la defensa de los derechos o aspiraciones de los miembros individuales o colectivos que estas asociaciones representan.

Otro autor que define los movimientos sociales es Joachim Raschke (1994) quien expresa lo siguiente:

Un movimiento social es un actor colectivo movilizador que, con cierta continuidad y sobre las bases de una elevada integración simbólica y una escasa especificación de su papel, persigue una meta consistente en llevar a cabo, evitar o anular cambios sociales fundamentales, utilizando para ello formas organizativas y de acción variables (124)

De la anterior descripción, adquiere relevancia el papel que da Joachim Raschke a la capacidad movilizadora, transformadora o de resistencia que irradia la esencia de los movimientos sociales. Para el autor, los movimientos sociales son esencialmente colectivos, y no tienen una función o acción específica, ya que pueden ser de transformación, ejecución, aplicación o resistencia de situaciones que afecten los miembros que ella engloba.

Por último, Touraine (1997) dice al respecto:

El movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta. En primer lugar, la acción colectiva tiene carácter cultural en el sentido de que lucha por el control y la reapropiación del conocimiento y por un nuevo modelo cultural. En segundo lugar, la acción colectiva se dirige hacia el futuro. En tercer lugar, el movimiento social se presenta como la combinación de un principio de identidad, un principio de oposición y un principio de totalidad (página).

Para Touraine, las acciones de los Movimientos Sociales se enmarcan ineluctablemente dentro de una contradicción o lucha entre el colectivo o los colectivos asociados que conforman el movimiento, y el adversario que pretende afectar o ultrajar los derechos de los movimientos. Para este autor, la lucha de los movimientos sociales no solo demarca una contradicción de tipo económico, jurídico o cultural, sino que el accionar de los movimientos sociales reacondicionan espacios de conocimientos para la apertura de nuevos modelos culturales, que aspiren a un futuro donde la identidad, la oposición y la totalidad definan los linderos donde las diversas colectividades se hagan presentes en la sociedad.

Entonces un Movimiento Social ¿es una acción? ¿un actor? ¿una conducta? Lo primordial es indicar que todas las definiciones tienen una cabida especial en el trabajo a desarrollar, y que en la actualidad el concepto *Movimiento Social* es una unión de diferentes espacios y tiempos, diferentes pensamientos y distintas posiciones que llevan siempre a la búsqueda de un objetivo.

Así pues, se puede observar que los Movimientos Sociales son, al tiempo, un agente de cambio social y una nueva invitación de forma de vida, de acción, de comunicación. Son una forma de identidad colectiva, que en la mayoría de las ocasiones está en la búsqueda de su incorporación de la agenda política, mecanismo idóneo para alcanzar los objetivos, puesto que siempre se está en la búsqueda de que aquello que se persiga, perdure en el tiempo.

Los *Movimientos Sociales* son parte activa de la sociedad, son formas de resistencia que buscan un cambio desde el núcleo, aspirando a satisfacer las demandas que han planteado sus miembros en los diferentes contextos en los que se desarrollan su accionar. Pueden ser demandas de carácter democrático, social, político, económico, cultural, etc. Los Movimientos Sociales son intentos colectivos para producir cambios en las instituciones sociales o en el sistema de normas, significados o en las relaciones sociales. Los Movimientos Sociales buscan, en definitiva, diversos cambios sociales, y estos puede referirse 16.

El Movimiento Social² siempre se forma en un contexto social e histórico determinado, en el espacio y tiempo de una sociedad concreta, ya que los cambios que se quieren lograr son el resultado del análisis de las situaciones que se están presentando. Así, cada movimiento, a pesar

² Término utilizado por primera vez en 1850 con la publicación del libro *La historia del movimiento social en Francia (1789-1850)*, en referencia explícita al movimiento obrero. (Alcañiz, 2010)

de reunir características similares como son identidad, ideología y acción, es único; aun cuando busque fines ya perseguidos por otros movimientos.

Movimiento Social implica movilización, ya sea de carácter espontáneo, como el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en los años sesenta, o de tipo organizado, como lo fue y ha sido el movimiento feminista, movimiento coordinado por varios grupos, y que progresivamente ha elaborado sus demandas de acuerdo al contexto social presente. Los Movimientos Sociales son una forma nueva de identidad y acción colectiva, son un agente de cambio social y una nueva propuesta de forma de vida, de acción y de comunicación.

Antes de la década de 1960, la noción *Movimiento Social* se refería a los movimientos de masas, específicamente al movimiento obrero, ya que era el mayor referente o sinónimo de resistencia y de cambio para esa época. Estos movimientos obreros rompían los límites institucionales, persiguiendo un cambio sustancial del sistema; razón por la cual eran considerados como movimientos de acciones irracionales al no adaptarse a las condiciones sociales del momento, y al estar en la constante búsqueda de cambio y aceptación.

Los Movimientos Sociales tuvieron sus bases generales a finales de los setentas e inicios de los ochentas, dado el cambio coyuntural e importante que se empezó a dar en aquellos años. Estos movimientos iniciales se pueden explicar desde la perspectiva de la oportunidad política, pues sólo los cambios que se generen en el sistema político permitirán la inclusión de sectores sociales aislados, especialmente en Latinoamérica con el fenómeno dictadura/democracia ocurrido en varios países. En estos países lo que se buscaba era una transformación sociopolítica desde el núcleo de la sociedad civil —entendida como la esfera de la vida social organizada voluntariamente— (López, Graciano y Peláez, 2009).

Es así Como los Movimientos Sociales constituyen un modelo nuevo de militancia en contexto; justo en momentos en que los paradigmas tradicionales políticos se están reconfigurando, obteniendo como resultado general: la violencia y persecución contra organizaciones y actores sociales.

En este sentido, los Movimientos Sociales constituyen formas de participación ciudadana, estructurales y grupales, que tienen como objetivos la necesidad de crear nuevos patrones para el ejercicio de la política –teniendo como eje central la participación de la ciudadanía y sus diversos puntos de vista en la toma de sus decisiones. Los actores políticos o actores de cambio social, conforman su vez un cierto tipo de homogeneidad colectiva, que los identifica con una propuesta común, esta homogeneidad no constituye un limitante, ya que ciertamente los Movimientos Sociales convocan una gran variedad de personas de distintas clases sociales y culturales, contribuyendo a una riqueza intercultural e interdisciplinar, la cual eventualmente terminará siendo un factor importante en la lucha de eso movimientos.

El concepto de Movimientos social, supone tipos de movilizaciones que retan los marcos de acciones políticas instituidas por las clases políticas tradicionales; es decir, los Movimientos Sociales amplían las áreas de acción política y social. Movimiento social indica formas de acción aplicables a diversos argumentos, por ejemplo, al ecologismo, al pacifismo y al feminismo. De tal suerte que, en términos descriptivos y de acción, los Movimientos Sociales son más amplios y diversos que los movimientos de tipo sindical. Los Movimientos de tipo sindical se relacionan exclusivamente con ejes temáticos como por ejemplo condiciones salariales, mientras que los Movimientos Sociales amplían los contextos funcionales y de acciones.

Pero el amplio espectro que convocan los movimientos sociales implica siempre un mecanismo de resistencia que desborda la idea tradicional de Derechos Humanos, tal como lo dice Rajagopal (2005) en su tesis “El Derecho Internacional desde abajo”:

la idea de derechos humanos ha demostrado ser ciega a la enorme variedad de las luchas por los derechos humanos que se encarnan bajo la forma de la resistencia de los movimientos sociales en el Tercer Mundo, al mismo tiempo que se ha demostrado que la idea de desarrollo está asociada con la represión de la resistencia de masas (...) y con una modernidad destructiva. (37)

Los Movimientos sociales constituyen elementos colectivos de reivindicación, elementos colectivos constituidos de la diferencia y de la diversidad en su propio núcleo que luchan por la consecución de diversos fines que pueden ser homogéneos, pero siempre bajo el entendimiento de la diversidad social, cultural, y económica que él representa.

Con base en lo expuesto en este apartado, se pueden generar aproximaciones para entender que son los Movimientos Sociales. Podríamos sintetizar los Movimientos Sociales como actores políticos colectivos movilizadores, cuyo ámbito de participación persigue objetivos de cambio. Son grupos con una identidad más o menos homogéneas en la búsqueda de reconocimiento, que actúan como generadores activos de mediación entre las personas, las estructuras y las realidades sociales (López, Graciano y Peláez, 2009); dicho de otra manera, es el camino de unión entre el Estado y la Sociedad Civil, caminos sociales para lograr cambios institucionales.

En el siguiente capítulo se harán menciones a algunos de Movimientos Sociales que han existido en América Latina.

4. Los Movimientos Sociales en América Latina: Movimiento campesino, Movimiento obrero, Movimientos de clase media y Movimientos estudiantiles.

Luego de realizar una tentativa de conceptualizar qué son los Movimientos Sociales, en este apartado se hace necesario realizar un sucinto recorrido a través de los diversos Movimientos Sociales en Latinoamérica. Antes de contextualizar el presente trabajo en el Movimiento Social objeto de estudio (MOVICE), se hace necesario realizar un recorrido histórico de algunos Movimientos Sociales para tener una idea más clara de cómo funcionan estos. De esta manera se podrá comprender con más claridad cuáles han sido los mecanismos de lucha y resistencia del MOVICE en los momentos coyunturales de gran envergadura, social, política y cultural en el País.

Desde inicios del siglo XX, la existencia de distintas corrientes políticas y sociales en los distintos países de Latinoamérica generó inconformidades y la necesidad imperiosa de instaurar cambios en el seno de la sociedad. Tradicionalmente se han buscado generar espacios de equidad que conlleven a la modificación de los Estados (según el país de pertenencia), haciendo énfasis en la posibilidad de generar garantías de participación en los diferentes campos de acción a los cuales estos Movimientos buscaban acceder.

Como la acción colectiva es la suma de las acciones individuales, la acción sólo será importante en la medida en que los individuos la constituyen, estableciendo un vínculo inherente entre la acción individual y la colectiva, potenciando el objetivo perseguido y la resistencia correspondiente. Para Mónica Bruckmann y Theotonio Dos Santos en el documento “Los Movimientos Sociales en América Latina: Un Balance Histórico” en América Latina existieron cuatro corrientes principales para los Movimientos Sociales: Movimiento Campesino,

Movimiento Obrero, Movimientos de clase media y movimientos estudiantiles (Bruckmann y Dos Santos, 2008)

La autora menciona que el movimiento campesino fue una consecuencia de las condiciones en las cuales se encontraba establecida la forma de organización y cultivo de la tierra, cuestión principal en movimientos de corte campesino vinculados directamente con el movimiento indígena, tal y como se vislumbra en la historia de la Revolución mexicana. En este movimiento, liderado por Emiliano Zapata, símbolo de la resistencia mexicana, aceptado por los indígenas como su líder sin este si quiera acercarse a ser uno de ellos, participaron dos corrientes: La cuestión principal siempre giró en torno al trabajo y al dominio de la tierra. También en los años veinte y treinta, existió un auge de los movimientos campesinos en América Central, países en donde las empresas norteamericanas ejercían tanta presión y control sobre la tierra, que emergieron luchas en su contra.

En segundo lugar, Mónica Bruckmann hace alusión a el movimiento obrero, otra base de la resistencia popular del continente. Inició durante las primeras décadas del siglo XX, influenciado fuertemente por las revoluciones bolchevique y soviética, que sentaron las bases ideológicas del movimiento. De manera paralela lo hizo el proletariado de las zonas mineras (al ser uno de los campos mayormente afectados por la injusticia social y la inequidad laboral) buscando reivindicaciones colectivas que incluían: el derecho a la huelga, la libertad de expresión, el derecho de asociación, y el derecho a buenas condiciones de trabajo y salarios justos.

En el artículo inmediatamente referenciado, se hace mención a los Movimientos de clase media y Movimientos estudiantes, al igual que a al populismo y las luchas nacionales democráticas. Por los objetivos que trazan los lineamientos del actual trabajo, no se hacen mayores menciones

sobre estos dos tópicos, se consideran importantes, pero su desarrollo quedará para un trabajo posterior³.

5. Conclusiones parciales

En este capítulo se resaltó la importancia del cambio de paradigma que instauró la Constitución Política de 1991 en Colombia. Para el desarrollo de esta tesis es necesario aclarar la relación que existen entre la Constitución de 1991 y el accionar institucional del Movimiento Social de interés. Posteriormente, se intentó contextualizar un concepto fundamental para el desarrollo de esta tesis, el concepto de Movimientos Sociales, expuesto de manera sintetizada en el contexto Latinoamericano. La comprensión cabal de la dinámica y particularidades de esta categoría de análisis en el contexto latinoamericano, permite puntualizar el caso de los Movimientos sociales en Colombia. Esta contextualización al mismo tiempo será útil para tener claridad acerca de la noción de Movimientos Sociales que en este trabajo se utiliza. Bajo la comprensión más austera de los cambios paradigmáticos que instituyó la Constitución Política de 1991 en materia de Derechos Humanos y teniendo más claridad sobre lo que significa el concepto “Movimiento Social” (funciones, misiones, composiciones y objetivos) el siguiente capítulo abordará la cuestión del MOVICE en Colombia.

CAPÍTULO II: EL CASO DEL MOVICE: AGENTE DE CAMBIO

1. Introducción general al segundo capítulo

³ Si el lector desea obtener más información sobre estos Movimientos, puede dirigirse al siguiente sitio web: Bruckmann, Dos Santos (2008) *LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMERICA LATINA: UN BALANCE HISTORICO* Consultado en: <http://www.cetri.be/Los-movimientos-sociales-en?lang=fr>

Una vez realizado el recuento histórico de los movimientos sociales y su importancia como fuentes de resistencia social, de reivindicación y búsqueda de equidad, se debe abordar el tema central del presente documento, el MOVICE. Se debe observar de manera precisa si este Movimiento Social ha logrado reivindicar sus exigencias o, por el contrario, ha fallado en sus expectativas de consolidar un sistema de participación y acción para las víctimas del Estado dentro la institucionalidad colombiana. Se debe mencionar que el espíritu de lucha de esta organización sigue intacto, independientemente de las conclusiones que en este trabajo se desarrollen.

Para desarrollar este capítulo, como primera medida se centrará el surgimiento del MOVICE dentro del contexto colombiano, es decir, cuáles fueron las condiciones sociales y políticas en las cuales surgió este Movimiento. Segundo, se abordarán las bases que le dieron origen a este Movimiento, cuáles fueron los primeros pasos que promovieron la creación de este Movimiento, ¿Qué busca el MOVICE? ¿Cuáles son sus objetivos, visiones y planes de acción? En el tercer capítulo se abordará el plan de acción del MOVICE, mediante el resumen de la agenda que desarrolla el MOVICE para la consecución de sus fines. En el cuarto capítulo se precisará el contexto actual en el cual el MOVICE desarrolla sus funciones, es decir, una vez se ha concretado qué es el MOVICE, cómo surgió y cuáles son sus planes de acción, se intentará ubicar al lector dentro del contexto social, político, militar y jurídico en el cuál circula el MOVICE. Finalmente se analizarán dos recientes expresiones normativas (Ley 975 de 2005 y ley 1448 de 2011) en las cuales el MOVICE desarrollo labores esenciales para el desarrollo y ejecución de propuestas que influyeran en la codificación y aplicación de estas normas, esto se ha sintetizado bajo el concepto de “Cierres simbólico”

2. Conflicto armado en Colombia y surgimiento del MOVICE

El conflicto armado en Colombia ha generado espacios enormes de impunidad en las áreas urbanas y rurales del país. La ausencia de garantías por parte del Estado, la falta de acción de las entidades estatales destinadas a afrontar las consecuencias del conflicto, y el constante fortalecimiento de los grupos de autodefensa, entre otros factores, generaron las condiciones propicias y a su vez adversas para el surgimiento del Movimiento Ciudadano por la Paz. El Movimiento surgió como una acción colectiva en la década de los noventa, consolidándose a pesar de las sistemáticas de violaciones de Derechos Humanos en Colombia. El Movimiento Ciudadanos por la Paz tuvo desde sus inicios una concepción diferente a otros Movimientos Sociales, ya que su accionar, objetivos y misiones se adaptaba a los anhelos y necesidades sociales de esa época (no varía mucha de las condiciones actuales). El nuevo Movimiento supo englobar diversos grupos sociales que luchaban por generar espacios propicios para encontrar esferas de paz en Colombia.

Para comprender los orígenes se debe remontar al Seminario Internacional de Comisiones de Verdad realizado en Bogotá los días 8 y 9 junio de 1994. En él se presentó una perspectiva de la lucha contra los crímenes de lesa humanidad en otros países de Latinoamérica⁴ y se llegó a la conclusión, a raíz de las diferentes experiencias, de que existía (y aún hoy existe) una insuficiencia en la lucha por el cambio de las políticas que buscan la protección de las víctimas. La carencia de políticas venía impuesta a todos los niveles sociales, políticos y culturales, y era perceptible la necesidad imperante de registrar, documentar y sistematizar la información sobre

⁴ Colombia Nunca Más (1995) *Proyecto Colombia Nunca Más*. Documento digital consultado el día 20 de abril de 2017 en: (<http://psicologiajuridica.org/psj20.html>)

los crímenes estatales cometidos hasta el momento. Se estableció como objetivos el registro de todas las víctimas que habían sufrido violaciones a los Derechos Humanos. En ese momento existían conocimientos de las acciones cometidas, más no un cálculo cuantitativo de los sujetos que habían recibido esas acciones.

Posteriormente al surgimiento del Movimiento Ciudadano por la Paz, se creó el Proyecto Colombia Nunca Más (PCNM), lo cual se puede considerar como el surgimiento de las bases del futuro surgimiento del MOVICE. El proyecto Colombia Nunca Más fue un esfuerzo conjunto de diecisiete organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, apoyadas igualmente por organizaciones no gubernamentales de otros países. Este proyecto en su inicio se propuso salvaguardar la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia durante el ciclo de violencia, que se inicia en 1965. “Colombia Nunca Más”, a pesar de haberse realizado en otros países, presenta una situación *sui generis* en Colombia, ya que no se generaba en un contexto post-dictatorial o de alguna posguerra civil, sino que debía desplegarse en medio de las constantes acciones del vigente conflicto armado colombiano.

Este proyecto se inició en medio del acrecentamiento de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, y de un recrudecimiento perpetuo de las acciones violentas cometidas por parte de los actores del conflicto armado. Añadido a esto, se encontraba la estela dejada por el narcotráfico, y diversas acciones de Estado enfocadas a mermar su poderío (poderío del narcotráfico). Lo anterior trajo como consecuencias el aumento regular de víctimas, como resultado de la acción de los diversos actores del conflicto, y como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico.

Es claro que el PCNM surgió con el claro propósito de recuperar la memoria de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia, ya que su accionar se definía a salvaguardar

la memoria de las víctimas crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país durante el último e inconcluso ciclo de violencia iniciado en 1965⁵. Este periodo de violencia se extiende hasta días recientes, e impone la imperiosa necesidad de rememorar las víctimas de los infinitos espirales de la violencia en Colombia. El surgimiento del PCNM, y el apoyo constante Organizaciones Internacionales que en primera medida brindaron su apoyo a la creación de este proyecto, dieron posterior surgimiento al MOVICE.

Se puede sintetizar el origen del MOVICE como la sucesión de Movimientos que propendían por la lucha y reivindicación de los Derechos Humanos de las víctimas que han dejado los diferentes fenómenos de violencia en Colombia.

3. Fuerza Pública y Conflicto Armado en Colombia.

Luego de contextualizar el espectro político, militar y social en los cuales surgió el MOVICE, se hace necesario describir cuál ha sido el papel de la fuerza pública en la sistemática violaciones de Derechos Humanos en Colombia, esto para entender la denominación de MOVICE como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

La Fuerza Pública ha sido una institución esencial para la consolidación de los proyectos políticos y económicos de los actores que detentan el poder y la riqueza en Colombia. La convivencia pacífica de grupos paramilitares, fuerza pública y actores políticos, ha sido una estrategia de guerra planificada para la “Recuperación militar y social” de algunos territorios

⁵Colombia Nunca Más (1998) *Crímenes de Lesa Humanidad en la Zona 5ª* (1998). Documento digital consultado el día 22 de abril de 2017 en (http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=311)

nacionales. Bajo el auspicio de la fuerza militar se instauro “ ”⁶, obviando y sesgando las consecuencias que esos métodos de control y opresión generaran en la población civil.

El control militar y social a través de la violencia estatal, ha sido una práctica que favorece el diseño y la aplicación de políticas públicas para beneficiar específicos grupos al margen de la ley. Estas prácticas le otorgan cierto grado de validez y reconocimiento a estos grupos, adecuando los marcos legales del Estado Social de Derecho para el beneplácito de los grupos ilegales que soportan el actuar arbitrario y disfuncional del Estado, como han sido tradicionalmente los paramilitares.

Lo anteriormente descrito trajo como consecuencia, un aumento escalonado de patrones violentos en la sociedad, prueba de ello son las cifras dadas por la Fiscalía General de la Nación, según las cuales hasta el 30 de junio de 2014 se cuentan 4247 homicidios de civiles presuntamente atribuidos a la Fuerza Pública. Hasta el momento existen 823 condenas y 4001 continúan en investigación. Cabe resaltar que del 97% de los casos investigados sus presuntos responsables son integrantes del Ejército Nacional (Fiscalía 2014)⁷, institución que tiene como objetivo defender la “soberanía nacional”, pero que en el marco criminal de recuperación militar y social ha dirigido su accionar a comunidades consideradas “Enemigos internos”.

⁶ Asamblea General Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos (2009). *Informe de Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones del relator especial de la Naciones Unidas sobre los derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas (2005-2008)*. Documento consulta el día 19 de abril en: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8057.pdf?view=1>

⁷ MOVICE (2013) *Declaración final de Comité de Impulso Ampliado realizado en septiembre de 2013- Respuesta al derecho de petición radicado por el MOVICE el 8 de agosto de 2014*. Documento consultado el día 20 de abril de 2017 en: (http://www.movimientodevictimas.org/versionantigua/index.php?option=com_k2&view=item&id=3476:declaraci%C3%B3n-final-de-comit%C3%A9-de-impulso-ampliado-realizado-en-septiembre-de-2013&Itemid=340)

La Fuerza Pública en sus intentos de opacar la responsabilidad criminal que les atañe, ha terceriorizado la guerra, bajo la continua alianza con estructuras paramilitares que han ejecutados sus actos criminales con el auspicio de las Fuerzas Militares. La labor de las Fuerza Pública conjunta con estructuras paramilitares⁸ ha sido señalado por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ver masacre de Mapiripán, Operación Génesis y masacre de La Rochela). En dicha vinculación los integrantes de la Fuerza Pública han hecho parte de dichas estructuras, que ejecutan acciones penalmente reprochables contra sujetos que se oponen a ciertos intereses políticos y económicos, tal y como se encuentra consignado en la siguiente tabla (Cinep 2014):

TABLA No. 1 DEUDA CON LA HUMANIDAD. PARAMILITARISMO DE ESTADO EN COLOMBIA 1988-2003. CONSOLIDADO GENERAL DE VÍCTIMAS

VÍCTIMAS	TOTAL
Personas ejecutadas	11.161
Personas desaparecidas	1.869
Personas torturadas	164

⁸ MOVICE (2013) *¿Qué es el MOVICE y cómo ha sido su surgimiento?* Entrevista con Iván Cepeda. Documento consultado el día 20 de abril de 2017 en: (<https://puebloscaminando.wordpress.com/2013/12/02/que-es-el-movice-y-como-ha-sido-su-surgimiento-entrevista-con-ivan-cepeda-c/>)

Personas ejecutadas, torturadas y desaparecidas	100
Personas ejecutadas y torturadas	1.030
Personas ejecutadas y desaparecidas	107
Personas desaparecidas y torturadas	45
TOTAL VÍCTIMAS	14.476
Ejecuciones extrajudiciales	12.398
Torturas	1.339
Desapariciones	2.121
TOTAL	15.858

A pesar de los esfuerzos estatales por tratar de explicar este tipo de casos como hechos aislados, la cantidad de integrantes investigados por dicho motivo y el rango que ostentan los responsables vinculados a este tipo de prácticas, se puede deducir que la práctica implementada no es una excepción, sino que obedece a una práctica de carácter estructural. Esta estructura criminal ha favorecido la legitimación y creación de impunidad en Colombia.

4. Primeros Pasos del MOVICE

Luego de realizar un breve recorrido sobre los diversos antecedentes que sentaron las bases para el surgimiento de MOVICE, este subcapítulo se centrará en señalar sucintamente los fundamentos puros de mayor trascendencia e importancia dieron paso a la creación del MOVICE.

En mayo del año 2000, en el marco del desarrollo del Seminario-Taller sobre Impunidad y la Asamblea Nacional de Víctimas, se tomaron en consideración los objetivos del Movimiento Ciudadanos por la Paz como bases para la posterior creación del MOVICE, los objetivos de Movimientos se pueden describir como:

1. Racionalizar la experiencia de lo que ha sido la participación en los procesos de elaboración de los criterios de verdad, justicia, reparación y representación de las víctimas a nivel de las instancias internacionales.
2. Determinar el grado de participación de las víctimas en procesos de retorno de las dictaduras militares a las democracias formales, o en procesos de conflicto armado interno mediante la negociación.
3. Establecer el grado de eficacia y la participación de las víctimas en los procesos adelantados por intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, en los casos de la Ex Yugoslavia y Ruanda.
4. Racionalizar lo que ha sido la experiencia en los procesos adelantados en otros países en relación con quienes han cometido crímenes de lesa humanidad como parte de la política de corresponsabilidad universal de los Estados en Derechos Humanos.
5. Definir las propuestas de las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación integral, representación y reconciliación⁹

Este tipo de espacios fueron el inicio para la materialización de ideas de verdad, justicia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. En el año 2004 se presentaría un momento excepcional, un momento único en la lucha organizacional de los Movimientos de las

⁹MOVICE (2012) *Historia y Antecedentes del MOVICE*. Documento digital consultado el día 25 de abril de 2017 en:

(http://www.movimientodevictimas.org/versionantigua/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2685&Itemid=322)

víctimas en Colombia. En los días 26, 27 y 28 de agosto se realizó el Encuentro Voces del Mundo por Colombia el cual fue espacio de crecimiento para el intercambio de ideas, de testimonios y experiencias de resistencia a la impunidad, de aseveración del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En este encuentro se acordaron la búsqueda de propuestas para solventar la dramática situación de Derechos Humanos que pervivían en la realidad colombiana de ese tiempo¹⁰.

El nacimiento formal del MOVICE se da el 25 de junio de 2005, en el desarrollo del II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, Violaciones Graves a los Derechos Humanos y Genocidio, justamente el mismo año en que se empezó la desmovilización de los grupos paramilitares. En ese año se aprobó la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), que trajo como consecuencia intentos institucionales de reducir la responsabilidad estatal en la comisión de violaciones a los Derechos Humanos.

Durante la coyuntura del momento, el MOVICE concibió la eventualidad de que los sectores paramilitares desmovilizados reconocieran sus crímenes y revelaran la verdad de lo sucedido en el desarrollo del conflicto armado. Inicialmente el proceso de desmovilización de paramilitares e implementación de la ley 975 de 2005 dificultaría la materialización de objetivos de justicia, verdad y reparación. En este momento se hace necesario referenciar el documento fundacional del MOVICE que establece:

Fruto de un extenso acumulado histórico de luchas de las víctimas por los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral en Colombia. Sus antecedentes actuales se

¹⁰ Agencia prensa rural (2004). *Declaración final Voces del Mundo por la Vida en Colombia. Documento digital consultado el día 25 de abril de 2017 en: (<http://www.prensarural.org/encuentro20040828.htm>)*

encuentran en el trabajo realizado en el seno del Proyecto Nunca Más Crímenes de Lesa Humanidad de 1995; esfuerzo dirigido a salvaguardar la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1966 y 1998. Después de una década de investigación, Nunca Más ha documentado un subregistro de cerca de 41.400 casos de torturas, “desapariciones” forzadas y ejecuciones extrajudiciales.¹¹

Se puede percibir que las acciones, misiones y visiones del MOVICE reafirman su condición de defender la memoria y en general los Derechos Humanos de las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Lo anterior supone una contradicción entre el ámbito de acción del MOVICE y los eventos que se desligaban de la implementación de la ley 975 de 2005, que pregonaba de forma general, la creación espacios de impunidad para paramilitares.

El MOVICE es un conjunto de organizaciones, asociaciones sociales, políticas y jurídicas que propugnan la resistencia y la defensa de aquellos grupos sociales que han soportado los avatares del conflicto en Colombia. Debido a su heterogénea composición, el MOVICE supone el desarrollo común e interdisciplinar que enriquece sus acciones y funciones. Dentro de los diversos grupos políticos, sociales, jurídicos o culturales que guardan relación con el MOVICE, podemos mencionar solo algunos, (Herrera)

ONG: Colectivos de abogados José Alvear Restrepo, Comisión intercongregacional de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia, Comité permanente por la defensa de los Derechos Humanos, Comisión de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación de la Familia Franciscana de Colombia, Corporación Sembrar, Credhos,

¹¹ MOVICE (2005) Documento fundacional de MOVICE. Documento digital consultado el día 27 de abril de 2017 en: (www.movimientodevictimas.org)

Reiniciar, Corporación de Derechos Humanos semillas de Libertad (CODEHSEL), Corporación Jurídica Libertad, Corporación Humanidad Vigente, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Movimientos sociales cívicos: Comunidades eclesiales de base, Misioneros Claretianos de Colombia, Proceso comunidades negras, Coordinadora Nacional de Afro descendientes, Asociación Nacional de ayudas solidarias ANDAS, Instituto Nacional Sindical. Hijos y familiares de víctimas: Fundación Manuel Cepeda Vargas, Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad, Unión Patriótica UP, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADES), Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, Campesinos: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC-UR, Fesuagro, Coordinador Nacional Agrario, Federación Agro minera del Sur de Bolívar, Asociación de Campesinos de Antioquia, Asociación Nacional de Desplazados, Sindicalistas: Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Unión Sindical Obrera (USO), Instituto Nacional Sindical (INS), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), Sindicato de Trabajadores Mineros de Colombia (SINTRAMINERCOL), Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y comunicaciones a fines (ATELCA), Asociación Distrital de Educadores (ADE), Indígenas : Comunidad de Kamkuanos, Estudiantes: Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (2005: 14).

La cantidad y diversidad de Movimientos que hacen parte del MOVICE tienen factores comunes: Violencia, Víctimas y Derechos Humanos. De una u otra forma todas las organizaciones y sectores pertenecientes a este Movimiento se relacionan con los ejes temáticos anteriormente mencionados. El Estado colombiano ha creado estructuras criminales inherentes

a su funcionamiento con el objetivo de imponer sus formas y objetivos políticos, lo anterior trae como consecuencia la proliferación de Movimientos que luchan para contrarrestar y defender a los colectivos o grupos sociales que sufren las consecuencias de la política criminal del Estado. El Movimiento MOVICE agrupa una parte considerable de todos estos colectivos que luchan por el respeto y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

El MOVICE es una red de organizaciones, una plataforma que, por intermedio de trabajos y acción conjuntas, busca la reivindicación de la democracia plena, la lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado y el acompañamiento de las víctimas de la violencia estatal. Las luchas democráticas del MOVICE conservan siempre como garantías; la verdad, la justicia, la reparación integral, y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

5. Estrategias del MOVICE; acciones para la materialización de Derechos a la verdad, Justicia, reparación integral, Memoria y garantías de no repetición.

Luego del intento por definir qué es el MOVICE, qué asociaciones lo conforman, qué busca y cuál es su plan de acción. En este apartado, se intentará precisar las diversas estrategias del MOVICE para la concretar y materializar principios y derechos a la Verdad, Justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Como desarrollo lógico y metodológico de este trabajo, se hace imperioso estudiar las diversas estrategias diseñadas y ejecutadas por el MOVICE para la defensa de los Derechos esenciales e inherentes a las Víctimas. En este subcapítulo se abordarán los diversos aspectos de las estrategias del MOVICE para configurar acciones que permitan la creación de condiciones efectivas para la materialización y reivindicación integral de los Derechos de las Víctimas.

Una de las estrategias que ha puesto en marcha el MOVICE es la ***“Estrategia jurídica para castigar a los máximos responsables de crímenes”***. Mediante esta acción se pretende el procesamiento y castigo de los agentes estatales y otros responsables por la comisión de hechos criminales en el marco del conflicto armado. Para el MOVICE “responsabilidad” en este contexto significa: Ideación, planeación y ejecución; desde la financiación hasta el encubrimiento por medio de la desinformación (MOVICE, P 5, 2009). Las acciones concretas que plantea el MOVICE para el desarrollo de esta estrategia son: 1) Investigación y documentación sobre el paramilitarismo, aliados, crímenes, y modo de operación; 2) Registro de bienes despojados a las víctimas en el marco del conflicto; 3) Base de datos sobre paramilitares, territorios en los que actuaban, crímenes cometidos , financiados, responsables y formas de actuación; 4) Interposición acciones judiciales internas para el procesamiento de los responsables ; 5) Interposición de demandas ante Tribunales internacionales.

La segunda estrategia que demarca el plan de acción del MOVICE es la construcción de la Memoria Histórica mediante audiencias ciudadanas que permitan conocer el pasado, sancionar públicamente a los responsables y configurar espacios de participación a las víctimas dentro de las esferas políticas del país. Las acciones están dirigidas a la presentación de testimonios, recolección de denuncias, articular estrategias jurídicas y la creación de espacios de visibilización y externalización.

La estrategia siguiente es la creación de una Comisión ética para materializar la Memoria y la reparación integral a las víctimas. La Comisión ética pretende un rechazo social y general contra las distintas formas violencia dirigidas a impones formas de organización social y económica.

La cuarta estrategia es la proscripción constitucional del paramilitarismo. Con esta estrategia busca el MOVICE que se censuren legalmente todas las disposiciones normativas que sean

permisivas con la creación o ejercicio de actividades paramilitares. Lo anterior mediante la constitucionalización de los derechos de las víctimas, y la materialización de medidas de no repetición que prohíban determinante el paramilitarismo.

Otra de las estrategias que marcan el accionar del MOVICE es la exhumación de fosas comunes como lucha contra el olvido y la desaparición forzada. La desaparición forzada es una constante en la construcción histórica y social de la sociedad colombiana, por ende, esta estrategia es esencial para materializar los derechos de las víctimas a conocer la verdad, dignificar la memoria de los desaparecidos y exhumar los restos de los seres queridos.

Las siguientes estrategias desarrolladas por el MOVICE son 5) Lucha contra el genocidio político; 6) Fortalecimiento del Movimiento de Víctimas; 7) Retorno de los exiliados.

Durante el desempeño normal de las instituciones estatales (Democracia en Colombia) se han presentado eliminaciones sistemáticas de grupos sociales y políticos por parte del Estado y por grupos al margen de la ley (paramilitares) que actúan con el beneplácito del Estado colombiano. Es así como se han estructurado planes militares y policivos para exterminar grupos sociales o políticos en Colombia. Mediante esta estrategia el MOVICE aspira a la apertura de procesos judiciales nacionales o internacionales para la investigación de los casos de genocidio en Colombia, y de esa forma determinar responsabilidades del Estado, grupos empresariales, terratenientes, multinacionales etc.

El fortalecimiento del MOVICE como institución que agrupa diversidades étnicas, sociales, culturales y políticas, pretende ser una fuerza social más sólida para lucha contra las diversas injusticias y violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado colombiano. Para lo anterior, el MOVICE plantea una mejor coordinación con otros Movimientos Sociales para la

atención de denuncias sobre violaciones a Derechos Humanos, y de esta forma solidificar una estructura única coordinada para materializar acciones sociales, políticas y jurídicas a que haya lugar.

De esta forma se intentó ubicar al lector sobre la diversidad de misiones, objetivos, estrategias y acciones del MOVICE para materializar derechos y principios de Verdad, Justicia, reparación y garantías de no repetición.

CAPITULO III CIERRES SIMBÓLICOS, REIVINDICACIONES Y DIFICULTADES DEL MOVICE

1. Introducción General al Capítulo

En el anterior capítulo se generaron aproximaciones sobre las diversas estrategias del MOVICE para la garantía y materialización de ciertos Derechos fundamentales congénitos a las víctimas. La influencia y determinación que ejercen estas estrategias al momento de codificar, diseñar y

aplicar políticas públicas relacionadas a las víctimas adquiere el significado de “cierres simbólicos”.

En este capítulo se intentará primero definir que se entiende por “Cierres simbólicos”; luego de esa conceptualización, se analizarán puntualmente dos expresiones jurídicas en la cuales el MOVICE intentó materializar sus estrategias para la defensa y garantía de los derechos de las víctimas “Cierres simbólicos”

Durante el proceso de paz con los paramilitares en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se expidió la ley 975 de 2005 “para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.” El MOVICE realizó una ardua labor para adecuar ese marco normativo al respeto de los Derechos de las Víctimas; en el desarrollo de esta estrategia se consolidó una gran victoria o reivindicación para el Movimiento, esa victoria se denomina en este trabajo “Cierres Simbólicos”

El presente capítulo trata igualmente la ley 1448 de 2011 Por la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Esta ley también denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se dio en el marco del inicio de las negociaciones de paz entre el Estado y las FARC e introdujo limitaciones temporales que en el respectivo capítulo se abordarán.

Como temáticas finales de este capítulo se mencionarán las grandes reivindicaciones conseguidas por el MOVICE y las grandes dificultades y pérdidas que ha afrontado y sufrido este Movimiento.

2. Cierres Simbólicos

Por cierre simbólico se entiende el intento la recodificación de parámetros normativos, jurisprudenciales y políticos generada por la constante acción social, política y jurídica de los Movimientos Sociales. Es decir, los Cierres Simbólicos son intentos de reevaluar significados, políticas, leyes, jurisprudencia etc. atendiendo a las alternativas concepciones, ideas, pensamientos, propuestas y denuncias manifestadas por los sujetos sociales que se relacionan con esos objetos de interés.

Para dar un ejemplo de ello: El Estado colombiano consigno como Derecho Fundamental la libertad, sexual, religiosa, política etc. El Estado a través de algunos representantes ha sido reacio en reconocer el derecho al matrimonio entre parejas homosexuales, así como no generar definiciones normativas sobre el derecho a la adopción por parejas sexuales. Como primera medida se tiene una visión y definición oficial sobre el alcance y extensión de los Derechos de los homosexuales. Los Movimientos sociales que defienden derechos de las poblaciones LGTBI han instaurado diversas acciones legales para extender la órbita de sus derechos, como resultado se obtiene que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre temas que las demás instituciones estatales habían sesgado, y se ha obtenido una recodificación de los derechos de los homosexuales debido a la constante acción legal de los colectivos LGTBI del país. Lo anterior es un típico ejemplo de Cierre Simbólico, ya que el discurso de los Movimientos Sociales lucha contra el discurso oficial y logra modificarlo mediante sus estrategias o acciones.

Los cierres de carácter simbólico buscan (Crocco):

Dar cuenta de la dimensión discursiva del poder, intentando explicar cómo las imposiciones de determinados modelos mentales o representaciones subjetivas sobre la experiencia de

exterminio (para el caso colombiano no solo se limita al exterminio, sino a la legalización del mismo) funcionan durante el periodo posterior, influyendo sobre la (re)construcción de identidades colectivas y reproduciendo simbólicamente las políticas estatales a partir de determinadas prácticas y narrativas. (2014: Pág.2)

La denominación de “Cierres Simbólicos” adquiere mención especial en este capítulo, por ello en el subcapítulo siguiente se expondrá ciertos casos concretos sobre cierres simbólicos relacionados con el MOVICE en Colombia.

Por el objeto de la presente investigación, se analizarán puntualmente dos casos de cierres simbólicos propugnados por el MOVICE. Estos casos contribuyeron a la reconfiguración del papel de las víctimas dentro de los diversos procesos de paz que se han adelantado recientemente en Colombia. Debido a ello, el MOVICE ha desarrollado un rol esencial y determinante para reevaluar la función transcendental de las víctimas en la realidad política, social y jurídica del país. En los dos proyectos normativos que a continuación se tratarán, el MOVICE ha desarrollado acciones fundamentales para la reconfiguración social, política y jurídica de esas normas, en coherencia con las estrategias diseñadas y explicadas en el subcapítulo precedente.

3. La Ley 975 de 2005 o ley de justicia y paz.

En el marco del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y los paramilitares (año 2002), el MOVICE reportó que, al mes de julio de 2009, un total de 31671 paramilitares se habían desmovilizado de forma colectiva y 3682 de forma individual. Los datos gubernamentales establecían que, en el inicio del proceso en el año 2002, era tan sólo de 12000 personas (Moritz

Tenthoff, 2015) lo cual permite pensar que los grupos paramilitares beneficiarios de la desmovilización habrían engañado a la sociedad colombiana, ya que un número considerable de personas relacionadas en las listas de desmovilizados eran delincuentes comunes de las zonas de influencia paramilitar. Gran parte de los desmovilizados no eran realmente paramilitares, eran delincuentes comunes disfrazados de paramilitares, lo constituyó unos de los grandes fracasos de ese proceso de paz.

Otro asunto a mencionar, es que la ley originalmente tipificó como delito político la pertenencia o la conformación de grupos de autodefensa. La intención era clara: poder otorgarles amnistía a los grupos paramilitares. Con relación a esta ley y en el ejercicio de este cierre simbólico el MOVICE declaro:

1.- El Movimiento de Víctimas, ha planteado la necesidad de organizar a las víctimas directas, a sus familiares y a las organizaciones de donde eran afiliadas para que en forma conjunta se organicen en los municipios, departamentos y a nivel nacional para que sin excepciones, sin exclusiones se pongan de acuerdo para exigir el conocer la verdad histórica de lo sucedido con todas sus implicaciones, para que se investigue, juzgue y sanciones a los autores intelectuales y materiales, se repare integralmente el daño causado, en lo psicológico, la memoria y la dignidad de la víctima, en los daños morales y materiales y en todo sentido para poder reconstruir todo lo que destruyeron con sus delitos....

2.- Nuestra estrategia frente al marco jurídico de impunidad (ley 975/05). Al respecto consideramos que no validamos el marco jurídico expedido por el Estado Colombiano, ya que no se nos ha consultado nunca, no hemos participado en su discusión y aprobación, es decir, se nos excluyó totalmente. Por otra parte, nuestros derechos no

están garantizados en el actual marco legal y la Administración de Justicia en Colombia no es autónoma e imparcial. Por el contrario, ella garantiza que el 99.6% de los Crímenes de Lesa Humanidad se encuentren en la impunidad....

3.- El Estado, la Iglesia, los partidos tradicionales, el empresariado y los medios de comunicación se han movilizado para rechazar el secuestro. Lo han hecho con nueve años de retardo, que es el tiempo que muchos retenidos llevan internados en las selvas. Sin embargo, es legítimo también preguntar por qué nunca convocaron a la movilización contra los centenares de masacres efectuadas por el paramilitarismo en asocio con fuerzas militares oficiales, contra la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento de 3.5 millones de ciudadanos y el despojo violento de más de 6 millones de hectáreas de tierra cultivable. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado considera sin temor a equivocarse que el secuestro y la desaparición forzada deben desterrarse como práctica de las partes en la actual confrontación. Exigimos el encuentro inmediato y sin condiciones previas entre las partes para acordar un Acuerdo de Intercambio humanitario que ponga fin a este fenómeno (Movice 2007).

El MOVICE y las diversas organizaciones que lo conforman, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 975 de 2005 debido a los amplios marcos de impunidad que estimulaba esta ley. La Corte Constitucional mediante sentencia C-370 de 2006 condicionó la aplicación de la ley y declaró la inconstitucionalidad de la llamada “*Impunidad Iure*”, la cual consistía en aplicaciones flexibles de la ley en materia de investigaciones y sanciones, lo que al final se constituía como una forma legal de denegación de justicia.

Dentro de los fundamentos que alegó el MOVICE para la interposición de la demanda de inconstitucionalidad, se puede aducir el siguiente:

“La ley 975 de 2005 no prevé garantías adecuadas para la participación y acceso a la justicia de las víctimas, pues no le permite el acceso al expediente (art. 37.5 parcial), no prevé expresamente su participación dentro de las diligencias del proceso (arts. 17, 18, 34 y 37.7 parcial) y omite el recurso de casación (art. 26 par. 3). En esas condiciones, el procedimiento de la ley 975 no constituye un recurso efectivo”¹².

Así, la falta de garantías procesales y de participación de las víctimas en los procesos de justicia y paz era un llamado rampante de impunidad. Esta ley establecía rigurosas formas de participación para las víctimas, y clausuraba garantías procesales a las víctimas que en los procesos ordinarios penales cualquiera tenía.

Otro de los cargos relevantes que adujo el MOVICE fue:

“la ley permite que los desmovilizados accedan a los beneficios en ella establecidos, sin que tengan que hacer una confesión plena de los hechos (art. 17 parcial), sin que se les exija señalar el paradero de personas desaparecidas al momento de la desmovilización (art. 10.6 parcial) y sin que pierdan tampoco los beneficios por el hecho de cometer nuevos delitos (art. 29 parcial)”¹³.

Este apartado normativo desvirtuaba el espíritu del proceso de paz, ya que principios como la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición quedaban obcecados por la sola

¹² Sentencia c-370-2006- Corte constitucional de Colombia. La sentencia puede ser consultada en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-06.htm>

¹³ *Ibidem*

confesión del desmovilizado. El desmovilizado obtenía los beneficios de la ley sin contribuir realmente a materializar principios de verdad, justicia y reparación, suponiendo que el salto de la verdad a la reconciliación fuera posible sin pasar por la justicia (Giraldo; 2012: pág. 3).

Los estándares internacionales –consolidados por medio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana desde los años de 1988 y 1989 en diversos fallos contra Honduras– fueron los primeros en contemplar los Derechos de verdad, justicia y reparación, pilares de la Ley 975 de 2005. Aunque la Corte interamericana no ha hecho un análisis de carácter abstracto sobre la normatividad colombiana, sí ha mencionado en varios de sus conceptos los temas del paramilitarismo en el marco de la ley de justicia y paz.

El primer concepto al que ha hecho referencia la Corte es *paramilitarismo*, ya que es la causa principal de la promulgación de esta ley, en especial porque contempla todo lo relacionado con este tema. Es de mencionar que el Estado colombiano es el principal responsable de la creación de estos grupos, ya que estimulo la creación en 1965 de un marco jurídico permisivo como estrategia antisubversiva, que permitía el uso de armas por civiles para contener el avance y ataque de los grupos guerrilleros. Las sentencias más ejemplarizantes que tratan sobre este tema son: 19 comerciantes vs. Colombia, denuncia 11.603; Masacre de la Rochela vs. Colombia, denuncia 11.995; Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, denuncia 11.748 y Masacre de Mapiripán vs. Colombia, denuncia 12.250 (Carvajal, 2015). Todas estas sentencias de la Corte Interamericana tienen un factor común y es el surgimiento del fenómeno del paramilitarismo y la responsabilidad del Estado por su conducta permisiva y/o negligente al no proteger la vida de sus ciudadanos. La Corte ha hecho énfasis especial en siempre resaltar el nexo entre el Estado (Fuerzas Armadas) y el paramilitarismo. Por ejemplo, en la sentencia denominada 19 comerciantes vs Colombia dice la Corte:

“Se ha documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la Fuerza Pública respecto de las acciones de dichos grupos. En los informes publicados desde 1997 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en los que se alegó que el gobierno y las fuerzas armadas colaboraron con los paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil (Sentencia 19 comerciantes, 2005)”.

La Corte a pesar de reconocer el esfuerzo de Colombia en lo que respecta a investigaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz, también menciona regularmente el riesgo latente en la sociedad colombiana por la existencia de estructuras paramilitares. Las medidas desarrolladas en la ley 975 de 2005 no han surtido un efecto real, ya que el paramilitarismo sigue presente en regiones del país. Este hecho sigue siendo denunciado por el MOVICE.

En lo que respecta a la Ley de Justicia y Paz en concreto, la Corte ha mencionado que es un inicio, pero no es suficiente, ya que considera que muchas de las medidas adoptadas en la norma no tienen el carácter de reparación integral, lo cual permite que continúe la situación de impunidad y no se evidencia la aplicación de garantías a las víctimas a un acceso total a la verdad, a la justicia, y a la no repetición. Igualmente, la Corte ha manifestado su inconformidad con la falta de medidas para el cese absoluto del paramilitarismo colombiano. La Corte acentúa el hecho de que los procesos de carácter interno que son cobijados por esta Ley presentan unas

demoras enormes¹⁴, de lo anterior se responsabiliza al Estado. La falta de medidas constituye una flagrante omisión a los principios y estándares que dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la garantía al acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este organismo internacional ha hecho claridad en que los fallos judiciales proferidos por el Estado colombiano en el marco de la Ley de Justicia y Paz, no manifiestan ninguna responsabilidad estatal por la violación de los distintos Derechos Humanos, ni cobijan los principios rectores de la Corte.

La Corte Interamericana y el MOVICE han sido enfáticos en afirmar que la Ley de Justicia y Paz sólo pretende el resarcimiento de carácter económico, sesgando otras medidas de reparación integral, como el perdón por parte del Estado a las víctimas y sus familiares y la no suspensión de investigaciones hasta el conocimiento de la verdad.

Así pues, el Sistema Interamericano en cabeza de la Corte y el MOVICE reconocen que esta Ley es un gran paso en el marco de un proceso de transición, admitiendo que el Estado colombiano ha hecho avances en lo que respecta a las investigaciones de los hechos victimizantes objeto de la norma, pero también agrega que esto no debe ser visto como si fuera algo de carácter excepcional, puesto que es una obligación estatal el garantizar la verdad y la memoria histórica a las víctimas. Se debe mencionar la competencia internacional de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos de esta índole, ya que no basta la toma de medidas excepcionales en los procesos de justicia y paz, sino que se requiere que estas medidas sean efectivas para garantizar y materializar los diversos Derechos de las Víctimas. Por ejemplo, en materia de reparación integral determina el alto Tribunal:

¹⁴ Aparte 190 Sentencia Caso La Rochela contra Colombia

Restitutio in integrum, que consiste en restablecer la situación anterior a la violación o, de no ser esto posible, en establecer una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se pague una indemnización como compensación por los daños ocasionados (Caso Masacre de Mapiripan, 2005)

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, verifica y vigila la implementación y desarrollo de la Ley 975 de 2005. Esta oficina dispuso medidas sobre qué puntos y qué mecanismos eran apropiados para que el marco jurídico diseñado cumpliera con estándares respetuosos en materia de Derechos Humanos, todo esto en el desarrollo de sus objetivos¹⁵. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó diversas asesorías para el diseño y aplicación de la ley de Justicia y Paz, entre estos se menciona el siguiente:

“En septiembre de 2003, la Oficina envió comunicaciones escritas a los congresistas. Lo mismo hizo el 30 de marzo y el 14 de junio de 2005. Ha emitido comunicados de prensa el 28 de agosto de 2003, el 6 de mayo de 2004 y el 13 junio de 2005. Asimismo, ha presentado ponencias relativas a los distintos proyectos de reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley: en 2003, el 16 y el 23 de septiembre; en 2004, el 10 y el 28 de febrero, el 25 marzo y el 2 de abril, el 28 de junio y el 19 de septiembre; en 2005, el 24 de febrero, el 1 de marzo, el 15 y 22 de abril, el 25 de mayo

¹⁵ *Entre sus mandatos están: promover la cooperación internacional, estimular y coordinar las actividades del Sistema de Naciones Unidas y ayudar al desarrollo de nuevas normas y la ratificación de tratados relativos al tema, además de responder a violaciones graves de derechos humanos y tomar medidas para prevenir violaciones.*
<http://www.cinu.org.mx/temas/dh/acnudh.htm>

y el 23 de junio, dos de ellas en audiencias públicas convocadas por la Comisión I del Senado el 23 de septiembre de 2003 y el 1 de marzo de 2005 (Humanos O. e., 2005)”.

En estos informes, ponencias, recomendaciones y conceptos la ODACDLNUPLDH estableció que Colombia debía contar con un marco jurídico que proteja específicamente los Derechos a la verdad, la Justicia y la Reparación Integral de las víctimas. Hace mención la Oficina del Alto Comisionado en que el concepto de *ley de justicia y paz* desarrollado en Colombia, no logra reunir los elementos fundamentales requeridos para concretizar un sólido proceso de paz, respetuoso de las garantías y Derechos de todas afectados por la guerra.

En términos de la Oficina del Alto Comisionado, La ley 975 era muy beneficiosa judicialmente para los victimarios, ya que reduce considerablemente las penas privativas e incluso amplía las posibilidades para que se le otorgue libertad condicional a quienes han cometido graves crímenes, sin que estos contribuyan efectivamente al esclarecimiento de la verdad y la reparación de los mismos, situación que abre una puerta gigantesca a la impunidad (Humanos O. e., 2005) . De ello se puede extraer, que las estrategias diseñadas por el MOVICE son coherentes con el sistema universal de Derechos Humanos, y los cierres simbólicos que el MOVICE ha propuesto son esenciales en la construcción, diseño y aplicación de procesos relacionados con víctimas y responsables de violaciones a los Derechos Humanos.

Las debilidades puntuales a las que ha hecho alusión la ODACDLNUPLDH y el MOVICE sobre la ley 975 de 2005 son las siguientes:

- 1) La ley no estimula en forma clara el logro de acuerdos colectivos entre el Gobierno y los grupos armados al margen de la ley para que estos últimos cesen las hostilidades, dejen

las armas, abandonen el conflicto armado, y desmonten efectivamente sus estructuras ilegales.” (Humanos O. e., 2005)

- 2) “La ausencia en la ley de referencias al conflicto armado interno y al derecho internacional humanitario hace que no existan fronteras claras respecto al tipo de delitos que podrían ser cobijados por la llamada pena alternativa” (Humanos O. e., 2005) Esta falta de claridad conlleva que cualquier clase de delitos quede cobijada {por la Ley de Justicia y Paz.
- 3) “El considerar el paramilitarismo como un delito político permite cobijar con la impunidad a las personas, incluyendo eventualmente a servidores públicos, que hayan participado o asistido en la conformación de grupos paramilitares o en sus actividades ilegales” (Humanos O. e., 2005) los delitos de carácter político pueden ser sujetos de amnistías por parte del congreso, lo cual conlleva a que no se garantice los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.¹⁶
- 4) “La ley aprobada no incluye condiciones y mecanismos lo suficientemente efectivos para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de la verdad”. (Humanos O. e., 2005). El desconocimiento de la verdad conlleva a que el Estado imponga una ley de “perdón y olvido”, bajo la cual se hace a un lado la memoria histórica, se desconoce la verdad de las víctimas y se incrementa la impunidad.

¹⁶ *La facultad para la concesión de amnistías reposa en el Congreso de la República pues se trata de una decisión que involucra una limitación a la aplicación de la ley penal y por ello ninguna otra rama del poder público se halla habilitada para tomarla. Es una institución de carácter general en cuanto se refiere de manera impersonal a las conductas punibles que son objeto de amnistía y sólo procede por delitos políticos, quedando excluidos los delitos comunes. (Sentencia C-695 del 2002)*

- 5) La ley aprobada no ofrece suficientes mecanismos para superar los obstáculos para una efectiva reparación a las víctimas. No garantiza que el Estado y sus instituciones presten el apoyo pro-activo que las víctimas tienen derecho a tener y a esperar, siendo las más vulnerables, expuestas y, muchas veces, justamente las más débiles por su condición de víctimas o familiares de estas (Humanos O. e., 2005)

Las observaciones del ODACDLNUPLDH y del MOVICE fueron puntuales sobre aspectos esenciales de la ley, el objetivo era que el Gobierno no expidiera la ley sin la atención a los puntos mencionados. De todo esto es posible inferir que el MOVICE en su funcionamiento es coherentes con los criterios expedidos por Organismo internacionales. El Movimiento denunció en los mismos términos de los organismos internacionales las mismas carencias de la ley 975 de 2005, precisamente la dificultad para el conocimiento de la verdad, reparación integral de las víctimas y garantías de no repetición. La ley 975 de 2005 no confronta de manera efectiva y adecuada el desmonte de las estructuras paramilitares en el país, por el contrario, aumentos los grados de impunidad para todos aquellos beneficiarios de la misma. (MOVICE, 2016)

La Ley se ejecutó en el marco del proceso de desmovilización paramilitar, y en el transcurso de su implementación existió un momento clave que implicó un triunfo rebosante para las víctimas, y en especial para el Movimiento social. La Corte Constitucional declarara inexecutable el artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz, este artículo caracterizaba las acciones de los paramilitares dentro de la categoría de “Delitos políticos”, era ostensible que el accionar de los grupos paramilitares representaba acciones para el beneficio de sus miembros y no eran cometidos por motivos “políticos o altruistas”.

Por intermedio de artículos o “trampas jurídicas” con intenciones tan lesivas como el descrito anteriormente, la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos,

crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra ha sido institucionalmente promovida y consentida por el Estado a través de diferentes mecanismos legales. Esta disposición de la Ley de Justicia y Paz sólo tipificaba como delito político la conformación o pertenencia a los grupos paramilitares, no expresamente la comisión de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La declaratoria de inexequibilidad de este artículo evito mayores grados de impunidad, así desde un punto de vista jurídico se logró una gran victoria para las víctimas, y desde lo que se ha denominado “cierres simbólicos” se modificó el rol tradicional que ocupaban las víctimas en los procesos de diseño, aplicación y ejecución de normas, obligando al Estado colombiano a atender y respetar las exigencias de los Movimientos Sociales.

4. Cierre simbólico en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

La ley de Víctimas y Restitución de tierras fue la primera expresión normativa que se dio en el marco del inicio de las negociaciones del actual proceso de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Farc). Esta ley ha sido un intento de reparaciones integrales a gran escala a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia (con ciertos límites de carácter temporal). La ley contempla reparaciones económicas, simbólicas y otros tipos de medidas dirigidas a materializar los Derechos de las víctimas del conflicto. Con relación a este proyecto normativo dijo el MOVICE:

1. La ley 1448, o ley de víctimas como se le conoce, es la primera que pone en el centro de la institucionalidad a la víctima, el Estado entonces crea toda una institucionalidad especial, exclusivamente encargada de atender los asuntos relacionados con las mismas

y despliega todo un accionar jurídico, social, económico y patrimonial, para ir en busca de la verdad, de la justicia y de la reparación. (...)

2. Las víctimas encuentran una voz por medio de la institucionalidad, que, si bien no es perfecta, son esfuerzos que realiza la institucionalidad para las víctimas, que se queden cortos en la realidad practica será otro tema que plantear más adelante.

3. La institucionalidad crea espacios de participación, en donde la víctima como sujeto social también construye y ayuda a la edificación, no solo de su reparación individual, sino también colectiva, participa por el restablecimiento de sus derechos vulnerados y, por ende, también será una oportunidad de que las víctimas establezcan una vocería

4. Es justo reconocer que la ley hace un esfuerzo en procura de garantizar los derechos, especialmente los atinentes a la aprehensión y la reparación, así como de la restitución de tierras. Estos aspectos constituyen los elementos centrales del impulso a una política pública de aprehensión, reparación y restitución de los derechos a las víctimas del conflicto colombiano. (...) (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE, 2014)

Esta ley promulgada en el 2011 entiende el fenómeno de la distribución de la tierra en Colombia como factor generador de violencia, por ende, contempla un capítulo especial sobre restitución de tierras, creando un sistema completo mediante el cual las víctimas pueden solicitar la restitución de los bienes inmuebles que fueron forzados a abandonar como consecuencia del desarrollo del conflicto.

El despojo de tierras en el desarrollo del conflicto armado ha sido un fenómeno que se extiende a lo ancho y largo del País, a pesar de la vigencia de esta ley, no se han restituidos un número

considerables de bienes inmuebles a las víctimas del conflicto. De acuerdo al informe “El riesgo de volver a casa” de *Human Rights Watch*, a junio de 2013 sólo una familia había retornado a su hogar como resultado de una sentencia en el marco de la Ley 1448 de 2011. En respuesta a un derecho de petición presentado por el MOVICE, la Unidad de Restitución de Tierras declaró el 24 de julio de 2014 que sólo hay 617 sentencias en todo el país de las 29515 que tienen orden de restitución. (Estado, 2015). Lo anterior es realmente alarmante, ya que no se están materializando las aspiraciones sociales, políticas y económicas que dispone la ley 1448 de 2011.

Otro factor que ha impedido la restitución de tierras a sus legítimos dueños, ha sido la legislación nacional sobre la adquisición de predios que superan la unidad agrícola familiar¹⁷, por medio de la Ley 1450 de 2011. Al respecto Claudia López afirma:

“Es hacer confluir en el trámite legislativo intereses legales e ilegales, y no prever mecanismos específicos para excluir de los beneficios a los ilegales. La captura normativa se hace a través de normas que se justifican y promueven en nombre de intereses legales, pero cuyas consecuencias económicas, políticas e institucionales se pueden usar también en provecho de actores e intereses híbridos e ilegales (López; 2010: pág. 73).

Los grupos paramilitares realizan acciones orientadas a frenar los eventuales procesos de restitución de tierras. En ese sentido, la nueva generación de grupos paramilitares utiliza los

¹⁷ Entendida como la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión permite, con su proyecto productivo y tecnología adecuada, generar como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un capital que contribuya a la formación de su patrimonio (Incoder)

mismos métodos que las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para lograr sus fines.

Respecto a esta ley, se analizarán los conceptos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue expuesta en el informe Verdad, justicia y reparación: Cuarto informes sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia:

La Comisión destaca que la situación de los Derechos Humanos en Colombia supone complejidades adicionales derivadas de la violencia sistemática y generalizada que es par de la vida diaria de la población colombiana, debido al conflicto armado interno. En este contexto, las obligaciones del Estado se rigen tanto por las normas del derecho internacional de los Derechos humanos, como por aquellas del DIH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013)

La Ley 1448 regula una amplia gama de aspectos vinculados con las víctimas del conflicto armado. En efecto, la Ley 1448 contiene disposiciones generales sobre los derechos de las víctimas dentro los procesos judiciales, ayuda humanitaria, atención y asistencia. La Ley contiene igualmente disposiciones especiales de protección integral y regulación de los mecanismos de participación de las víctimas. Dentro de los mecanismos de reparación integral, se disponen medidas de restitución, indemnización administrativa, medidas de rehabilitación y satisfacción, y garantías de no repetición (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013)

Los Estados tienen la obligación de actuar de manera diligente para que las víctimas accedan a mecanismos judiciales necesarios e idóneos para la defensa de sus derechos humanos, de acuerdo a lo estipulado en la Convención Americana de los Derechos Humanos (Artículos 8 y

25 de la CADH). Por tal motivo la Comisión y el MOVICE han considerado que la Ley de Víctimas es un gran avance en lo que considera el desarrollo del principio de reparación integral, ya que supera el simple punto de vista de la indemnización económica (enfoque costumbrista en el Estado colombiano en lo que se refiere a “reparar” a las víctimas durante el conflicto armado), e incluye otras medidas materiales como la asistencia psicosocial, la entrega de viviendas dignas para las víctimas y la restitución de las tierras a aquellos que fueron desplazados. Junto con este tipo de medidas cobraron importancia las de carácter simbólico en orden de salvaguardar la memoria histórica del conflicto, reflejado esto en la institucionalización del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (9 de abril). Al respecto expresa la Comisión:

“La Comisión valora nuevamente la decisión del Estado de adoptar un sistema administrativo reparación que abarque las diferentes causas, situaciones y particularidades de las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH derivadas del conflicto armado interno. La Comisión reconoce los retos derivados de la masividad de las violaciones de derechos humano perpetradas en el marco del conflicto armado, la articulación de la multiplicidad de instituciones involucradas tanto a nivel nacional como local, y la implementación de las diferentes medidas de reparación en un marco de continuidad del conflicto armado interno y violencia (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013)”.

La Comisión y el MOVICE resaltan asuntos favorables de la implementación de la Ley 1448 de 2011, incluso reconoce los retos derivados de la enorme cantidad de violaciones de Derechos Humanos perpetradas en el marco del conflicto armado. La articulación de toda la multiplicidad de instituciones involucradas tanto a nivel nacional, regional y local, y la implementación de

diferentes medidas de reparación en la continuidad del conflicto(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013) denotan grandes esfuerzos institucionales para crear condiciones de paz en Colombia. A pesar de ello existen falencias en la aplicación y desarrollo de esta ley, estas falencias han sido señaladas por el MOVICE a través de los distintos mecanismos informativos y jurídicos de los que disponen. Dentro de esas falencias, la Comisión advierte sobre uno de temas que mayor debate ha suscitado en la Ley de Víctimas, y es tema referente al alcance y determinación de las víctimas que podrían acceder a los mecanismos de reparación previstos en la ley. Este tema ha sido de especial interés para el MOVICE ya que, a través de su acompañamiento continuo en la búsqueda del retorno de las víctimas a sus tierras, ha sido enfática en denunciar que no se adoptaron medidas para garantizar los derechos de los campesinos a sus tierras y territorios, así como la incapacidad institucional de proteger los derechos fundamentales de la población rural (MOVICE, 2016).

Como se ha mencionado anteriormente, la ley contempla límites de carácter temporal para acceder a los beneficios de reparaciones administrativas y restituciones de tierras. En materia de restitución de tierra, solo los despojos de tierras cometidos después del 1 de enero de 1991 son susceptibles de ser restituidos. Debido a eso, en el ejercicio de este cierre simbólico, el MOVICE interpuso demanda de inconstitucionalidad aduciendo que:

“Esta expresión infringe el principio de igualdad, porque no incluye a las personas propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que fueron despojadas u obligados a abandonarlas con anterioridad a esa fecha, lo que a su vez ocasionaría una trasgresión del derecho a la igualdad de quienes no fueron incluidos puesto que no podrían invocar las disposiciones previstas en la Ley 1448 para solicitar la restitución

jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzosamente (Sentencia C-250 de 2012, 2012)”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el MOVICE también han manifestado las críticas de la sociedad civil en relación con la limitación temporal de la Ley 1448, dado que “establecería la posibilidad de una reparación económica sólo a las víctimas de abusos después de 1985” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013). El MOVICE en la ejecución de sus estrategias de cierres simbólicos, siempre ha planteado posturas críticas respecto a las políticas estatales de reparación integral y restitución de tierras, ya que la existencia de delimitaciones temporales para efectos de reparación o restitución discrimina el grupo de víctimas entre las cuales tienen reales derechos y las que no. Lo anterior establece dos maneras de comprender el universo de víctimas en Colombia. El primero grupo de víctimas: todas aquellas que sufrieron actos violatorios de Derechos Humanos antes 1985, o fueron despojados de sus propiedades después de 1991. El segundo grupo de víctimas: todos aquellos que haya sufrieron actos violatorios de Derechos Humanos con anterioridad a las fechas anteriormente mencionadas. Mientras el primero grupo de víctimas tienen derechos más sólidos y reales (materiales, económicos, simbólicos), el segundo grupo tiene derecho solamente a reparaciones simbólicas, lo cual no es suficiente para compensar el inmenso daño que han sopesado estos individuos, familias o colectivos (MOVICE, 2016)

Se puede observar que el cierre simbólico del MOVICE en relación a esta normativa, se centra en criticar los límites temporales para acceder a los diversos beneficios de reparación integral. Sin embargo, la Corte Constitucional no considera que estas expresiones atenten contra ningún principio o derecho, ya que:

“Finalmente la limitación temporal no resulta desproporcionada respecto de los derechos de las víctimas pues la fecha del primero de enero de 1991 precisamente cubre el período histórico en el cual se produce el mayor número de víctimas de despojos y desplazamientos según se desprende de los datos estadísticos aportados por el Ministerio de Agricultura. Ante esta dificultad se podría sostener que toda delimitación temporal es inconstitucional, pues en principio las medidas de reparación de índole patrimonial deberían ser garantizadas a todas las víctimas, sin embargo, tal postura limitaría de manera desproporcionada la libertad de configuración del Legislador, además que sería abiertamente irresponsable desde la perspectiva de los recursos estatales disponibles para la reparación de los daños causados, pues generaría expectativas de imposible satisfacción que acarrearían responsabilidades ulteriores al Estado colombiano (Sentencia C-250 de 2012, 2012)”.

Esto significa que el cambio de la delimitación temporal realizado en la norma implicaría el desconocimiento de las limitaciones económicas del Estado para la inversión de tal propósito, limitaciones que ya se vislumbran al momento de usar los mecanismos de reparación de la Ley, los cuales tienen reconocimiento oportuno, pero cuya ejecución demora años en concretarse.

Es necesario también tomar en cuenta otro punto de vista, el aportado por la ONU respecto a este cierre simbólico, como se han denominado en el enfoque investigativo de este trabajo:

“La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, ratifican su respaldo a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, promulgada para promover el respeto y cumplimiento de los derechos de las víctimas, incluyendo la reparación de los daños a su dignidad, su integridad, sus vidas y

sus bienes, y como un instrumento importante para facilitar la construcción de la paz y la reconciliación”. (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, 2016).”

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y el ACNUR han considerado que la Ley de Víctimas es un reto para el Estado colombiano, el cual se asume por medio de la institucionalidad creada para tal fin (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras y el Centro de Memoria Histórica). Esta norma es un avance en el desarrollo de un concepto integral de reparación, para el universo de 7 millones de víctimas, siendo el 80% de ellas población desplazada. La restitución de tierras es una de las partes más importantes del proceso reparador que las Naciones Unidas apoya y promueve, en complementariedad con las medidas de reparación individual y colectiva previstas en la Ley. (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, 2016).

Es claro que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, el ACNUR y el MOVICE han dado su apoyo a esta Ley, pero también han señalado varias falencias, por ejemplo:

“una de las más importantes es que en zonas rurales y otras ciudades, las indemnizaciones perdieron su capacidad transformadora para los beneficiarios por causa de nivel relativamente bajo de goce de derechos en estos lugares y debido a la inacción de entidades locales que frecuentemente carecen de presupuestos adecuados, capacidad técnica o voluntad política” (Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General, 2015).

De igual forma el MOVICE ha enfatizado las carencias que se desligan del proceso de restitución de tierras, ya que, al momento de ejecutar los procesos de restitución, estos no son

efectivos, en el entendido de que los procesos de regreso y reubicación no satisfacen las necesidades de las víctimas. Cuando las víctimas regresan a los predios restituidos, se ven inmersos en ambientes de hostilidad, lo que es una evidencia de la falta apoyo estatal.

Igualmente, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos y el ACNUR han manifestado que las acciones del Gobierno en la implementación de Ley de Víctimas y otros procesos de diálogo han sido significativas, sin embargo,

“hace falta una real garantía para que las víctimas puedan incidir en la toma de decisiones y en su implementación. Esto requiere espacios que trasciendan la formalidad, con mayores recursos, paciencia y flexibilidad para facilitar que ellas sean socias reales en la creación de soluciones. (Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General, 2015)

En este sentido, existen principios especiales en la ley 1448 de 2011, como son la Justicia, Verdad, Reparación y garantías de no repetición. La demanda por la materialización efectiva de estos principios supone una respuesta efectiva de protección. Según el MOVICE estos principios no son atendidos de manera integral por parte de la institucionalidad, puesto que, aunque la ley ofrece el conjunto de estos derechos, no son recibidos por las víctimas en su integralidad por la ineficacia o negligencia para atenderlos.

La segunda observación del MOVICE obedece a la falta de coordinación entre entidades competentes para dirimir las dificultades que puedan surgir con la relación a los procesos de indemnización, reparación, restitución o cualquiera al que hubiese lugar, ya que planificación jerárquica de estas instituciones impide un proceso de coordinación. En este sentido la misma estructura institucional no guarda coherencia con la forma metodológica y operativa para atender de manera oportuna a la víctima.

Por otra parte, la Ley de víctimas, aunque ha significado un cambio trascendental para el fortalecimiento del aparato judicial y administrativo, así como la generación de condiciones propicias para promover y consolidar la paz y la reconciliación nacional, se ve afectada por una clara falta de garantías para que las víctimas accedan a sus beneficios. Los procesos de restitución de tierras, suponen una grave amenaza para las víctimas que desean la restitución de sus predios que, ya que, según informes presentados por la Defensoría del Pueblo, entre los años 2006 y 2011 se dieron al menos 71 asesinatos de estos sujetos. (Human Rights Watch, 2013).

Se puede afirmar que Ley 1448 de 2011 supone grandes riesgos para las víctimas que desean acceder a los beneficios de esta ley, riesgos de tipos materiales (amenazas) y frecuentes obstáculos jurídicos o administrativos (falta de recursos, cambios de interpretación de la ley, poseedores de buena fe, tenedores etc.)

Ante la apuesta del Gobierno Nacional en cuanto al desarrollo rural por medio de la Ley de víctimas y restitución de tierras, el MOVICE ha estado presente en la creación y aplicación de esta ley, ha socializado con las víctimas el conocimiento los distintos mecanismos que poseen para recuperar los derechos que han perdido a causa del conflicto, y ha enseñado cómo se debe acudir y ante qué instancias para hacer cumplir el objeto de la norma. No obstante, esta labor se encuentra torpeada (sobre todo en los procesos de restitución de tierras), por los “Ejércitos anti-restitución” que realizan acciones encaminadas a detener los procesos de restitución de tierras y evitar el despojo de los predios que ya han sido restituidos. Por medio de amenazas y otro tipo de intimidaciones, estos grupos ilegales o “neoparamilitares” defienden las apropiaciones ilegales de la tierra que se dieron a causa de la violencia propia de conflicto armado interno en Colombia.

Sirve como ejemplo el proceso de la finca “La Pola” donde el MOVICE ha realizado acompañamiento a las familias campesinas de la hacienda La Pola (Chibolo, Magdalena) para la restitución de este inmueble. Los habitantes de este predio llegaron a la región a principios de los años 80, en 1997, en medio del proceso de adjudicación de este territorio, recibieron la orden, por parte de paramilitares de abandonar ese lugar. En la actualidad estas tierras han sido adjudicadas mediante títulos, entregadas a modo de ocupación a terceras personas, o están en propiedad de la Nación. Estos desplazados por la violencia sin acompañamiento institucional y con la ayuda del MOVICE han regresado voluntariamente a sus tierras, pero las estructuras paramilitares que aún operan en esos sectores han realizado acciones de persecución contra los campesinos retornantes y contra la organización integrante del movimiento que los acompaña, la Corporación Jurídica Yira Castro. Así pues, las diferentes solicitudes de restauración de derechos presentadas ante los programas de prueba de restitución de predios y las entidades han obtenido resultados nulos¹⁸.

El cierre simbólico de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras ha implicado una lucha constante por considerar a la víctima como el eje central de los procesos de paz. Aunque no se hayan modificado las limitaciones temporales establecidas en la ley, el MOVICE se ha esforzado por acercarse a cada una de las víctimas que solicita su acompañamiento, buscando siempre brindarle los elementos necesarios para lograr su objetivo, demandando a través de su accionar la generación de garantías políticas y una verdadera política pública de protección a víctimas, reclamantes de tierras, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y líderes políticos y sociales. A pesar de las dificultades en la implementación de la ley 1448 de 2011, se puede considerar este cierre simbólico como una lucha constante del MOVICE por

¹⁸ Revictimización a las víctimas de crímenes de Estado, Las agresiones continúan

materializar los derechos de las víctimas, desde la propia elaboración de la ley hasta su implementación.

5. Reivindicaciones del MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha logrado reivindicaciones considerables a lo largo de su existencia, pero ha sostenido a la vez una constante lucha por existir, por surgir en un país que se ha empeñado en ocultar el itinerario de impunidad que ha existido con el favorecimiento gubernamental, lo que ha conllevado que por mecanismos legales y políticos se toleren sistemáticas violaciones de Derechos Humanos.

Las reivindicaciones del MOVICE han establecido que ningún tipo de solución política a un conflicto armado se puede basar en impunidad, violaciones de Derechos Humanos, negación de las víctimas, negación política y jurídica a los derechos de Justicia, Verdad, Reparación y garantías de no repetición. Los cierres simbólicos que se han tratado en el texto, fueron ejemplos de iniciativas políticas y jurídicas para avanzar en aspectos legales de un futuro “post-conflicto”. Se debe destacar que estas iniciativas legales se dieron en el marco del conflicto armado, con objetivos claros y específicos, pero con la gran deficiencia de no ser útiles en términos prácticos, tal y como ha sido denunciado por el MOVICE.

Como se planteó inicialmente en el transcurso de la Investigación, el Movimiento ha participado en la creación de la normatividad relacionada con las víctimas de una forma paralela, ya que su marco de acción surge con posterioridad a la implementación de las normas, por lo cual su influencia ha sido pausada y limitada a los recursos legales disponibles.

Una vez analizados estos puntos jurídicos de participación del movimiento, se ha logrado determinar ciertas posturas. En efecto, el MOVICE ha ganado a través de su existencia terrenos considerables como referente de las víctimas, pero a su vez ha sufrido retaliaciones y limitaciones de tipo jurídico o político.

En las subsiguientes líneas se analizarán los grandes logros obtenidos por el MOVICE, lo que ha convertido al Movimiento en algo importante e interesante como colectivo que genera interés, y las razones que lo han convertido en el estandarte para la defensa y protección de las Víctimas.

Esta investigación ha ido generando constantes interrogantes respecto al MOVICE. Uno de ellos es el interés por conocer sus logros; entre los cuales cabe destacar los siguientes:

1. El MOVICE ha sido pieza fundamental para que la construcción de la memoria histórica sea un mecanismo de reparación y reconciliación. Desde sus inicios con el Proyecto Colombia Nunca Más (PCNM) su objetivo inicial fue salvaguardar la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Este objetivo implicaba el no olvido de las víctimas, pero no simplemente como una base de datos útil para consultar lo que ha sucedido en el desarrollo del conflicto armado, sino como herramienta esencial de reconciliación nacional. Para el MOVICE este postulado es básico para la construcción de confianza entre las víctimas, demostrar a las víctimas los diferentes mecanismos de reparación integral que contemplan los procesos de reivindicación, restablecimiento y respeto de los Derechos Humanos en el marco del proceso de paz. El accionar del MOVICE en este asunto, recodifica en papel de la memoria histórica dentro del universos de reparaciones integrales a las víctimas.

2. El MOVICE, mediante estrategias jurídicas como demandas de inconstitucionalidad, ha logrado interpolar sus críticas y visiones en los proyectos de ley que versan sobre los Derechos Fundamentales de las víctimas. Los recursos de inconstitucionalidad fueron interpuestos con posterioridad a la promulgación de las normas, por lo que sus argumentos influenciaron de manera posterior en la reconfiguración normativa y jurisprudencial de estas leyes. Aunque no ha participado directamente en la creación de esta normatividad, ha influenciado de manera determinante en la interpretación, aplicación y ejecución de las mismas.
3. El MOVICE señala que la impunidad es la principal debilidad del proceso de paz en Colombia, por ende, ha encaminado sus esfuerzos a la erradicación de normas que abren brechas de impunidad. Por intermedio de recomendaciones realizadas al gobierno (Movice, 2016), ha dejado claro que la impunidad es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado colombiano frente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así pues, la lucha contra la impunidad es un eje transversal en las acciones del MOVICE, lucha que se desarrolla mediante acciones políticas como reuniones, concejos, etc., (Movice, 2016)
4. El MOVICE, en su visión proactiva de los Derechos de las víctimas, ha generado diversas propuestas para el procesamiento penal de los implicados en violaciones a Derechos Humanos. Fue así como propuso la creación de la sala especializada para las violaciones de los Derechos Humanos. Para el MOVICE no solo el procesamiento penal adquiere relevancia para la garantía de los Derechos Humanos, por ende, ha propuesto la creación de una Comisión de la Verdad que indague sobre los diversos aspectos en las violaciones de Derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra

cometidos en Colombia. El MOVICE propugna el cumplimiento de garantías de reparación integral por parte del Estado mediante la eliminación de todas las restricciones jurídicas o administrativas (Movice, 2016). De lo anterior se puede afirmar que este Movimiento no se ha conformado simplemente con mostrar las falencias de algunos proyectos normativo, también ha buscado soluciones funcionales y las ha manifestado a través de su conjunto organizacional para que sean acogidas por instituciones estatales al momento de tratar asuntos de víctimas.

5. Lo más relevante del MOVICE es el hecho de haberse convertido en referente de las víctimas de los crímenes de Estado en el país, ya que su principal labor ha consistido en desenmascarar las acciones estatales en relación a violaciones de los Derechos Humanos. De esta forma el MOVICE se ha convertido en fuente de consulta en temas trascendentales del actual proceso de paz, como lo son: la justicia transicional, la reparación a las víctimas y la restitución de tierras. En esta investigación se ha podido notar que el MOVICE es coherente con los lineamientos de organismos internacionales en temas de víctimas y Derechos Humanos. De lo anterior se puede afirmar que el MOVICE plantea la Defensa de los Derechos de las Víctimas en consonancia con las diversas exigencias internacionales en la materia, y con la diversa concurrencia de los distintos organismos que componen este Movimiento, debido a ello, el MOVICE es una fuente que debe ser atendida por el Estado al momento de asumir asuntos de Derechos Humanos y Víctimas.

A pesar de los puntos anteriormente mencionados, no toda ha resultado positiva para este Movimiento, ya que en los últimos diez años el Movimiento ha asumido pérdidas humanas y trabas de tipo administrativo, jurídico y político por parte del Estado. No todas las exigencias del MOVICE han sido atendidas por el Estado, la lucha reivindicatoria por las víctimas ha tenido

éxitos y fracasos; por ello el movimiento pervive y, posiblemente, continúe existiendo, en tanto sus demandas no sean satisfechas en su totalidad.

6. Pérdidas y dificultades actuales del MOVICE.

Las pérdidas más importantes que el MOVICE ha tenido, ha sido la ejecución o asesinatos sistemáticos contra los integrantes de este Movimiento. Esto indica que las reivindicaciones adelantadas por el Movimiento tienen un costo de sangre (Movice, 2016).

Las pérdidas de integrantes de este Movimiento, suponen obstáculos para el cumplimiento de objetivos. Cuando es asesinado un integrante, no sólo se ve afectada su familia y círculo cercano, sino todos aquellos procesos de acompañamiento en los cuales se encontraba inmerso, lo que genera un retroceso del MOVICE y acrecienta el temor de quienes continúan en la lucha.

Desde las acciones judiciales adelantadas, considera el MOVICE que las conquistas obtenidas por el Movimiento relacionadas con la interposición de acciones judiciales en el país han sido parciales. Lo anterior debido a que las estrategias jurídicas no se han agotado en su totalidad. En lo relacionado con la ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz se obtuvo un triunfo considerable en lo que respecta al artículo 71 logrando la des-caracterización del paramilitarismo como un delito de índole política, lo que en su momento marcó una victoria en la que el movimiento se destacó como uno de los impulsores de dicha demanda¹⁹, logrando que la norma contemplara los derechos de las víctimas. Desafortunadamente este logro del MOVICE

¹⁹ Las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la expedición de la Sentencia C-370 de 2006 sobre la ley 975 de 2005 fueron promovidas por el MOVICE.

quedó sin efectos cuando el Estado promulgó el Decreto 4436 del 2006 mediante el cual quedó consignado en su artículo 2:

Podrán obtener los beneficios establecidos en los artículos 19 y 24 de la Ley 782 de 2002²⁰ y demás normas vigentes, quienes se encuentren en las circunstancias en ellos previstas por hechos relacionados con la conformación o integración de grupos de autodefensas, con anterioridad a la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa del presente decreto.

De esta manera el Estado se sustrajo legalmente del cumplimiento de lo establecido en la sentencia, ya que, dando cumplimiento a la misma, decidió regular este tema para una Ley creada con anterioridad a la demandada, dejando sin efectos prácticos lo conseguido en la misma, y aun cuando jurídicamente fue un triunfo, sus efectos fueron perdidos, desvirtuándose así las reivindicaciones logradas.

Otra pérdida jurídica que ha afectado al Movimiento y todo lo que él representa, tiene que ver con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Las demandas con respecto a esta norma no han podido ser plasmadas jurídicamente, debido a que las acciones de inconstitucionalidad²¹ no han prosperado de manera correcta. Esta situación afecta las reivindicaciones del Movimiento por cuanto las víctimas que representa deben acoplarse a un régimen jurídico que no facilita la reparación, pues aun cuando el esfuerzo estatal es arduo para dar cumplimiento a esta iniciativa, en la práctica ocurren demoras y no se reconoce la totalidad de las víctimas. (Movice, 2016).

²⁰ Norma creada con anterioridad para otorgar prerrogativas a las personas que voluntariamente se desmovilicen y no para aquellas que han sido capturadas

²¹ Sentencia C-250 y C-253^a de 2012

Aquí es importante reconocer que el MOVICE ha luchado porque todas las víctimas sean reconocidas como tales, sin importar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos (con salvedades, claro está), pero su lucha no ha generado los resultados específicos esperados.

El MOVICE es un agente de cambio ante el discurso estatal de impunidad histórica existente en relación con los crímenes cometidos por los agentes del Estado contra la población civil colombiana. Este movimiento ha denunciado cómo el Estado no sólo permitió el crecimiento de las estructuras criminales parte del conflicto, sino que las creó y fomentó. El MOVICE como expresión social es el resultado de una necesidad de las víctimas del Estado, ya que esta criminalización afectó todas las esferas de la vida social, política, cultural y económica en Colombia. El Movimiento mediante sus cierres simbólicos reivindica la necesidad de desvirtuar acciones políticas y jurídicas que justifiquen la existencia de grupos paramilitares, el MOVICE propende porque el Estado reconozca su participación y permisibilidad en la creación de este fenómeno criminal, asesino y burdo. Por lo anterior que el Estado acepte que permitió el crecimiento de todas y cada una de los grupos paramilitares que han atacado a la población civil, con su beneplácito o su omisión.²²

El MOVICE es un actor social que propone alternativas para abordar asuntos relacionados con Víctimas, este Movimiento apuesta por una transformación social como objetivo central (Movice, 2016). Frente a esta realidad, el Movimiento demandó normas esenciales para el universo de Víctimas en Colombia, intentando que las víctimas del conflicto sean parte de los

²² MOVICE (2013) *¿Qué es el MOVICE y cómo ha sido su surgimiento?* Entrevista con Iván Cepeda C. Documento consultado el día 2 de abril de 2017 en: (<https://puebloscaminando.wordpress.com/2013/12/02/que-es-el-movice-y-como-ha-sido-su-surgimiento-entrevista-con-ivan-cepeda-c/>)

procesos políticos que involucran el desarrollo de diversos marcos jurídicos inherentes a temas que los afectan.

El MOVICE todavía no tiene el éxito deseado, esta razón sigue justificando su existencia. La transformación social que pretende procura que haya una comprensión generalizada de que las víctimas son parte esencial de la sociedad, que no pueden ser seres segregados y marginados por las condiciones criminales que los han afectado. La impunidad sigue siendo una constante en lo que respecta al conflicto, y hasta que esta transformación se dé, el MOVICE será un referente de cambio, será la resistencia de todas aquellas víctimas de un Estado inclemente e incapaz, será el sol que renace ante la impunidad.

7. Conclusiones parciales

De lo anterior podemos concluir que el MOVICE es una estructura organizada con un despliegue de acción marcado u orientado por la defensa de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado. Para ello, como se puede desprender del texto anterior, este Movimiento ha intentado modificar la situación de las víctimas dentro de los procesos de elaboración y ejecución de las leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011. Lo que se ha denominado “cierres simbólicos” demuestran los compromisos de este movimiento para modificar concepciones generalizadas sobre las víctimas en Colombia, demostrando que las víctimas son el eje central de cualquier proceso de paz, y sus voces deben ser atendidas, acompañadas y asesoradas para el restablecimiento o la satisfacción plena de sus derechos.

Aunque las principales acciones del MOVICE han sido algunas exitosas (ley 975-2005) y otras no (ley 1448 de 2001, límites temporales) es evidente que MOVICE ha reconfigurado el significado de las víctimas dentro de las estructuras y aparatos de poder del Estado y la sociedad.

Mediante sus estrategias para materializar derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ha fortalecido la figura de las víctimas como la esencia y el fundamento del proceso de paz en Colombia. De esta forma se puede concluir que el MOVICE representa la reconfiguración y revaluación de las víctimas en el espectro político y social de Colombia.

A pesar de todo lo anterior, las acciones del MOVICE se limitan por el carácter reivindicatorio del Derecho, de allí que se considere al MOVICE como Movimiento Social reivindicatorio y no emancipatorio, por la misma esencia del Derecho y las relaciones jurídicas, sociales y políticas que de él se desligan.

Para una comprensión más diáfana sobre lo que significan los conceptos de reivindicación, emancipación y hegemonía desde una concepción sociológica del Derecho, el capítulo final se comentarán nociones generales de sociología jurídica y se evaluarán como las acciones y estrategias del MOVICE representan características de un Movimiento Social reivindicatorio.

CAPITULO IV: HEGEMONIA, EMANCIPACIÓN Y REIVINDICACIÓN

1. Introducción general al capítulo

Para entender las acciones del MOVICE en términos de reivindicación, emancipación y hegemonía, se hace necesario intentar desarrollar sucintamente el concepto de sociología jurídica. En el desarrollo de este capítulo se abordará brevemente el término sociología jurídica, para entender si las acciones del MOVICE se enmarcan dentro de patrones sociológicos de Emancipación, Reivindicación o Hegemonía.

Posteriormente a la definición de lo que se entiende por Sociología jurídica, se desarrollaran conceptos generales sobre Emancipación, Hegemonía y Reivindicación. Lo anterior para analizar, estudiar y responder a la pregunta si desde la esencia de las fuentes jurídicas o el Derecho se puede generar reales cambios o transformaciones sociales, todo esto con especial mención a las luchas y estrategias del MOVICE.

Finalmente, se presentarán las conclusiones parciales de este capítulo y se tipificarán si las acciones del MOVICE son Emancipatorias, Contra-Hegemónicas o Reivindicatorias,

2. Concepciones generales de sociología jurídica

La complejidad de estudiar la sociología jurídica viene radicada en que ésta es estudiada desde diversos enfoques teóricos como el realismo jurídico norteamericano, los estudios críticos del derecho, o desde las visiones contemporáneas de autores tan importantes como Pierre Bourdieu, entre otras. Se hace necesario delimitar al menos de forma parcial dicho termino para saber a qué se hace referencia cuando hablamos de sociología del derecho en esta investigación. Igualmente se utilizará la expresión sociología jurídica como sinónimo de sociología del derecho.

Por otro lado, se tomarán en cuenta algunos aportes de Bourdieu especialmente la noción de campo jurídico. Para este autor un campo es un espacio en donde los agentes, con propiedades y características particulares que no se adquieren por naturaleza, sino que son captadas de acuerdo a relaciones sociales de poder, luchan por privilegios que Bourdieu denomina “capital”; el cual a su vez puede ser económico, social, cultural o simbólico. A demás encontramos dentro de los campos un “habitus” que tiene que ver con la formación de ciertas estructuras sociales producto de la historia de las relaciones humanas, y, agrega este autor, no son necesarias sino contingentes (Bourdieu, 1983). En esta investigación se ha visto como diversos agentes como el MOVICE, organizaciones internacionales, el Gobierno, la Corte Constitucional y algunos medios de comunicación luchan dentro de un campo por el control u obtención de un capital que en algunos casos serán derechos constitucionales, por ejemplo.

Se entiende por sociología jurídica los diversos fenómenos jurídicos, sociales y políticos que acontecen dentro de un determinado campo social. Es decir, las diversas contenciones surgidas entre los actores que conforman un determinado campo jurídico (en términos de Bordieu). Dentro de un Estado Social de Derecho las leyes son los instrumentos idóneos para materializar acciones estatales de carácter social, cultural, político o económico. Lo que se comprende como sociología jurídica para efectos de este trabajo, es la relación circunstancial y contenciosa entre el Estado y los Movimientos Sociales generada por la codificación de normas sobre víctimas y procesos de paz.

Así, se comprende de manera general la sociología jurídica como el campo académico que aborda los elementos o fenómenos causantes de las normas (leyes) y las consecuencias o efectos que estas normas jurídicas tienen en determinados campos sociales. Por campos sociales no sólo se comprende la generalización que se extiende a todos los sujetos que habitan o hacen parte de

un campo social, también se comprende los efectos que las normas jurídicas tienen en determinados grupos sociales, individuos o colectivos. Para Oscar Correas (Correas):

La Sociología jurídica es una disciplina científica que intenta explicar las causas y efectos de las normas jurídicas. En tanto ciencia, es un conjunto de enunciados que pretenden describir plausiblemente- es decir pretenden ser “verdad”- tanto los fenómenos que pueden ser vistos como causantes o “determinantes” del ser así de las normas jurídicas, como los fenómenos que pueden ser vistos como efectos de ellas.
(1993-pág 23)

En este trabajo se entiende Sociología jurídica como el campo de acciones entre el Estado y los Movimientos sociales para la configuración y aplicación de normativas que estén relacionadas con las víctimas y sus Derechos Fundamentales.

Los resultados de esas luchas, contenciones y contingencias se enmarcan dentro de patrones de sociología jurídica de emancipación, hegemonía y reivindicación.

En el siguiente apartado se intentará definir sucintamente qué se entiende por emancipación, hegemonía y reivindicación, para luego comprender si desde las luchas y estrategias que ha planteado el MOVICE se pueden generar realmente emancipaciones o transformaciones sociales.

3. Hegemonía, Emancipación y Reivindicación.

3.1. Hegemonía y Contra-hegemonía

Para efectos de este trabajo, se denomina hegemonía a los métodos de dominación política, jurídica, social y cultural que se han ejercido en Colombia para la conservación de un determinado orden social y político. Es decir, las hegemonías son visiones particulares de la vida, del Estado y de la sociedad que se imponen y dominan sobre otras alternativas, formulas y concepciones de los ámbitos inmediatamente mencionados.

En este contexto se entiende por hegemonía, la dominación estructural, jurídica y política que ha ejercido el Estado Colombiano sobre las víctimas. La hegemonía consiste en la opresión sistemática que ha ejecutado el Estado colombiano sobre las víctimas, esta opresión no debe entenderse simplemente en términos de fuerza y violencia (aunque hayan sido los métodos de opresión más recurrentes), también se extiende a los diferentes modelos de control político-jurídico (leyes, normas, decretos, jurisprudencias) que se imponen a las víctimas. Con lo anterior se intenta explicar, que el Estado colombiano tiene una manera específica de concebir el conflicto armado interno en Colombia, los procesos de paz y los derechos de las víctimas; a esta visión del Estado se le denomina hegemonía.

La hegemonía es una noción y categoría usada por el marxismo -y otras tradiciones teóricas- para explicar el contexto social y en ese caso, para lo que nos interesa, es usada para explicar la realidad jurídica entendiendo esta como aquellos espacios de creación, interpretación y aplicación del derecho. Así la tradición marxista contiene un concepto a priori, es decir, algo dado y concebido sin la experiencia, dado de ante mano. Resulta que el derecho es hegemónico por naturaleza y como se puede apreciar esta concepción corresponde a visión esencialista de

las cosas en la que los conceptos y las palabras tienen un contenido esencial y originario. ¿Qué significa entonces que el derecho sea hegemónico? Es bien conocido el binomio sostenido por el marxismo entre fantasía y realidad. La primera corresponde a una dimensión de la existencia humana en donde el sujeto no puede ver las condiciones de explotación, desigualdad, ausencia de libertad, pues está encantado -por decirlo de alguna manera- por los medios de comunicación, o de forma más amplia por la ideología del sistema capitalista. La segunda por su parte tiene que ver con lo que está oculto detrás de lo que Marx llamó el “fetichismo de la mercancía”, esto es, las condiciones extremas y desfavorables en las que el proletariado produce la mercancía; piénsese por ejemplo en una *Favela* en el Brasil.

Ahora, el derecho por su parte constituiría la fantasía o “el fetichismo legal y la realidad a su vez tiene que ver con las condiciones desiguales de la sociedad; el derecho al mismo tiempo operaría como una especie de fantasía que concibe a derechos como la igualdad y la libertad, mientras que el sujeto se ve de frente ante esta realidad en la que no se cumplen los derechos.

En síntesis, la ciencia jurídica, los derechos, las leyes, la constitución son *per se* hegemónico, actúan a favor del capital; la naturaleza del derecho es ser una instancia dominadora y opresora.

El liberalismo, desde otro costado, genera una presentación distinta del concepto del derecho. Para esta vertiente el derecho no es *per se* hegemónico sino todo lo contrario: contrahegemónico. Para estos autores el derecho ha concedido una serie de garantías y prerrogativas a los ciudadanos más miserables y pobres. Esto va a tener un fuerte fundamento histórico, legal y político en las revoluciones de Norteamérica y Francia, pues por un lado estas permitieron la creación de un concepto de constitución en sentido moderno, aquella clásica y muy bien conocida definición del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, según la cual “una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los

derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución”. Por el otro lado, esto ha llevado a una serie de transformaciones sociales desde el reconocimiento de derechos.

Frente a estas dos posiciones han surgido una serie de críticas en las que se pone de presente el carácter no rígido y sobre anti-esencialista del derecho, pues concebirlo *a priori* como hegemónico (marxismo) o contra hegemónico (liberalismo) conlleva a restarle valor a los derechos en algunos casos; además de ser estas unas visiones extremadamente ideológicas. Las críticas se concentran fundamentalmente en darle al derecho un carácter modificable o variable como espacio para la transformación social. Ha sido precisamente la sociología jurídica la que se ha encargado de dar respuesta a la vez que cuestionar las bases tanto del liberalismo como del marxismo acerca de la relación entre derecho y cambio social.

Autores como Wendy Brown han sostenido que es muy cuestionable definir el derecho desde premisas dadas de ante mano como lo hacen el marxismo y el liberalismo y ante ello ilustran esto con la noción de los derechos como “significantes multiformes e irresueltos” o como “significantes vacíos”. Para Brown los derechos en este caso pertenecen a un “idioma ahistórico, acultural y acontextual” en donde su universalidad como privilegios asignados a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad forma deben ser analizados y ubicados en las condiciones locales de cada caso (Brown, 2003, p.84).

Se puede observar que hay casos en lo que el derecho ha operado como instancia contra hegemónica. Podemos citar las constituciones de Ecuador y Bolivia de 2008 y 2009 respectivamente en las que se encuentran un conjunto importante de reconocimientos de derecho a pueblos históricamente excluidos, la inclusión en las constituciones de idiomas, practicas ancestrales como el *sumak kawsay*, la *pachamanca*, el estado plurinacional, un tribunal constitucional con una inclusión de al menos varios magistrados pertenecientes a pueblos

indígenas, entre otras. Otro ejemplo importante es la famosa Corte Earl Warren en la Suprema Corte (1953-1969), así como algunos años en especial los primeros de la presidencia de Warren Burger (1969-1986) que tuvieron de una u otra forma como punto de inicio el icónico caso Marbury vs Madison, y en los que cabe resaltar casos como Brown vs. Board of Education, Mapp vs. Ohio, Miranda vs. Arizona, entre otros (Barroso, 2010, p. 392-395).

Las luchas contra-hegemónicas que se han definido con anterioridad, responden a reconocimientos transcendentales que se han conseguido desde la definición, estructuración y aplicación de nuevas visiones, estructuras políticas y jurídicas. Las luchas contra-hegemónicas a veces adquieren rasgos de luchas emancipatorias, ya que no simplemente aspiran a una materialización de derechos anteriormente consagrados, sino que trascienden a la construcción de nuevas y diversas maneras de construir y entender el Estado y la sociedad.

Para efectos de este trabajo, se considera que la Contra-Hegemonía y Emancipación presentan grandes similitudes, por lo cual en este trabajo se trataran los conceptos Contra-Hegemonía y Emancipación para significar lo mismo.

Para que el lector de este trabajo observe los contrastes entre los diversos conceptos, a continuación, se expondrán los conceptos de Emancipación y Reivindicación.

3.2.Emancipación

Para efectos de esta investigación se entiende por emancipación: la capacidad de redefinir y generar concepciones propias de la vida, de la política, del Estado y de la sociedad que tengan la fuerza de crear condiciones para abrir brechas y ranuras en ciertos espacios determinados de dominación. La emancipación es el respeto a la autodeterminación, a que los Sujetos, Actores

Sociales, Colectivos, Movimientos Sociales, Pueblos, Comunidades etc. Redefinan nuevas alternativas propias para vivir o para desarrollarse en una determinada sociedad o campo social.

En contraste con la Reivindicación, la Emancipación transgrede las instituciones sociales y políticas, es decir, rompen los espacios tradicionales de dominio y acción para crear nuevos espacios propios y característicos de los dominados. Dado lo anterior, se puede afirmar que la Emancipación es particularmente política y la reivindicación es esencialmente jurídica.

Para Gaudichaud:

Toda política de emancipación debe y tiene que combinar potencia y potestas, “poder hacer” y “poder sobre”, movimientos sociales y formas de organizaciones políticas. Para controlar y poner en jaque a las fuerzas reaccionarias, hostiles al cambio, es indispensable organizarse, alcanzar niveles mínimos de institucionalización e incluso de violencia plebeya hacia los dominantes. Toda vida en sociedad tiene espacios normados o institucionalizados, un sindicato es un espacio institucionalizado, un colectivo tiene un nivel de orgánica: ¿cómo no la va a tener un movimiento de emancipación masivo que pretende “cambiar el mundo” de manera revolucionaria?²³

Para el autor inmediatamente citado, toda emancipación es política y debe tener la capacidad de instaurar sustancialmente nuevas instituciones, inclusive mediante el ejercicio de la violencia. Se usa la definición del autor para demostrar que conceptual y teóricamente la emancipación es absolutamente distinta de la Reivindicación y muy cercana a la Contra-Hegemonía.

²³ Franck Gaudichaud (2014) *Poder popular, Estado y luchas sociales Conversación con Franck Gaudichaud*. Documento digital consultado el día 21 de abril de 2017 en (<http://contrahegemoniaweb.com.ar/america-latina-actual-segunda-parte-de-la-entrevista-con-frank-gaudichaud/>)

Lo temas anteriormente tratados demuestran la necesidad de contextualizar el derecho (ciencias jurídicas), analizar el espacio tanto geográfico como geopolítico donde se aplica éste para determinar su capacidad de cambio social. Siguiendo a García Villegas se puede argumentar la posibilidad de usar una concepción “amplia” y “débil” del concepto de emancipación (Villegas, 2016) y de esta forma alejarnos de las presentaciones del marxismo y del liberalismo. Si bien es cierto el derecho no es una herramienta fundamental y exclusiva usada para las revoluciones, pero es posible, dice Villegas, que en algunos eventos históricos concretos el derecho pueda ser contra-hegemónico o existe la posibilidad que pese a que los gestados con la complicidad del derecho no modifiquen de manera radical la realidad social y económico -deseo de los marxistas- pero puede generar efectos reivindicatorios.

El MOVICE despliega sus estrategias dentro de la institucionalidad del Estado Colombiano, eso le ha reportado grandes logros, ya que en muchos temas relacionados con víctimas se han atendidos sus observaciones, propuestas y estrategias. Un gran porcentaje de las acciones favorables que ha tenido el MOVICE han sido generadas por medio de acciones legales, es decir, dentro del sistema jurídico estatuido por las fuerzas políticas imperantes. Lo anterior lleva a la conclusión que las acciones del MOVICE no se enmarcan dentro de patrones sociológicos de Emancipación.

Para concluir esta idea, se afirma de manera determinante que: LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS DEL MOVICE NO SON EMANCIPATORIAS.

3.3.Reivindicación

Para efectos de este trabajo, se entiende Reivindicación como la lucha por la materialización de los derechos, aspiraciones, ideales y visiones que se han preestablecido en los actos

fundacionales del Estado. Es decir, las luchas que se dan para que el Estado materialice y cumpla las obligaciones que se desligan de los deberes del Estado para con la Sociedad, o, en otros términos, la lucha por cumplir con los derechos que determinado Estado ha creado, pero no se han materializado o cumplido.

Las luchas reivindicatorias se dan en el seno de la institucionalidad estatal, pretenden que las instituciones jurídicas y políticas del Estado reconozcan o materialicen un determinado grupo de derechos que están establecidos en la Constitución, leyes, reglamentos, convenios y tratados internacionales.

Dado los objetivos establecido en este trabajo, se comprende las acciones del MOVICE como Reivindicatorias, ya que, sus estrategias en gran medida se encuentran dirigidas a la materialización de los Derechos de las víctimas. Es una lucha que se ejerce en el seno de la institucionalidad para el reconocimiento de carácter estatal de una serie de garantías y derechos de las víctimas.

Según los patrones de sociología jurídica anteriormente descritos, las luchas del MOVICE no son Emancipatorias ni Contra-hegemónicas, son luchas de carácter Reivindicatorias.

Se considera que para que las acciones del MOVICE adquieran la connotación de Contra-Hegemónicas o Emancipatorias, debe el MOVICE luchar por rasgar las investiduras de poder en Colombia, por crear espacios de autodeterminación donde los colectivos que el MOVICE representa, determinen las políticas de víctimas y reconfiguren la esencia del propio Estado.

4. Conclusiones parciales

Mediante la Sociología Jurídica se pueden establecer qué tipo de relaciones se instituyen entre los sujetos y las normas, de igual forma se pueden generar conceptos para describir que tipo de acciones y relaciones se mantienen y se construyen en el seno de un Estado y de una Sociedad. Los conceptos de Hegemonía, Emancipación y Reivindicación permiten definir las relaciones contenciosas que se presentan entre el Estado y los Grupos, Colectivos o Movimientos Sociales para la definición o redefinición de espacios de poder.

Las disputas y estrategias que realiza el MOVICE se desarrollan dentro del amplio campo de Hegemonías que representa el Estado colombiano. Entre la lucha del MOVICE se presenta el Estado colombiano como la fuerza que domina e impone su visiones y categorías sobre la sociedad, economía y víctimas. El Estado colombiano es quien determina, diseña y construye los espacios de dominación donde circulan las estrategias del MOVICE.

Las luchas del MOVICE no son Contra-Hegemónicas o emancipatorias, ya que no aspiran a romper instituciones de poder para construir una visión alternativa sobre la situación o derechos de las Víctimas en el País. El MOVICE no busca transgredir o romper los espacios de dominación que el Estado colombiano representa para las víctimas. Una lucha Contra-Hegemónica o Emancipatoria del MOVICE implica crear nuevos espacios de autodeterminación para decidir la forma en qué deben ser tratadas las víctimas del Estado en el País; la lucha emancipatoria debe crear nuevos espacios Contra-Hegemónicos o Emancipatorios donde el MOVICE decida y circule, donde el MOVICE tenga la capacidad de designar jueces, fiscales, parlamentarios que representen los intereses de las Víctimas.

El MOVICE ejerce y desempeña sus acciones y estrategias dentro de la institucionalidad colombiana, es decir, ellos pretenden que el Estado atienda y materialice los diversos Derechos de las víctimas consagrados en la Constitución, Tratados internacionales, Jurisprudencia Constitucional y normas. Las reivindicaciones planteadas y logradas por el MOVICE han sido transcendentales para las víctimas en el País, pero se han limitado a que el Estado atienda, escuche y aplique sus exigencias, recomendaciones y críticas sobre proyectos normativos relacionados con víctimas.

En esta investigación se considera que el MOVICE debe transcender, las Víctimas de los diversos periodos de violencia en Colombia hacen parte esencial de la historia y el futuro de este país. Se entiende por transcender, que el MOVICE rompa espacios tradicionales de dominación y desarrolle nuevos espacios para la configuración visiones alternativas sobre política, economía, derecho, cultura y sociedad. Las víctimas tienen la potestad de cumplir un rol esencial y determinante en la construcción social, jurídica, económica y cultural de Colombia.

CONCLUSIONES

En esta tesis se intentó demostrar como bajo el cambio de paradigma instaurado por la Constitución de 1991 se modificó el rol tradicional del Sistema Judicial para garantizar de manera más sólida el Sistema de Derechos Fundamentales en Colombia. Dentro de ese mismo capítulo se definió qué son los MOVIMIENTOS SOCIALES y cuál son los tipos de Movimientos Sociales más representativos en América Latina.

Paso seguido, se delimitaron los antecedentes, visiones y estrategias del MOVICE para materializar los Derechos a la Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de no Repetición. Dentro del capítulo siguiente se expusieron cómo las estrategias del MOVICE han generado un impacto significativo en la situación de las víctimas, lo que se describió y conceptualizó en este trabajo como “Cierre Simbólicos”. De igual forma se describieron las conquistas más relevantes del MOVICE y las principales dificultades que ese Movimiento enfrenta.

En el capítulo final se generaron nociones generales sobre Sociología Jurídica para una comprensión sucinta de los términos Hegemonía, Emancipación y Reivindicación. Lo anterior, para concluir que las acciones del MOVICE no son Emancipatorias ni Contra-Hegemónicas sino, Reivindicatorias.

Las estrategias del MOVICE se presentan dentro de las institucionalidades estatales colombianas, mediante el uso regular de acciones legales. El derecho no tiene un carácter emancipatorio, los cambios logrados por el MOVICE no pueden ser entendidos en términos de Emancipación (tal y como se describió este concepto en el desarrollo de este trabajo) por el contrario las acciones del MOVICE se enmarcan dentro de acciones de tipo reivindicatorio, lo que también representa un gran avance.

De lo expuesto en los 4 capítulos de este proyecto de investigación, es posible inferir que el MOVICE puede ser considerado como un movimiento cuyas acciones de cambio se mueven dentro de patrones de reivindicación. Lo anterior, ya que el MOVICE representa acciones que generan un impacto social importante, pero que no tienen al mismo tiempo la capacidad para transformar la realidad de manera radical, o, dicho, en otros términos, el MOVICE se puede considerar como un movimiento reivindicatorio de Derechos Humanos.

Finalmente, y en consonancia con lo estudiado en la presente investigación, se realizan las siguientes recomendaciones para que el MOVICE trascienda hacia un Movimiento emancipatoria de víctimas en Colombia:

1. Tener presente que el derecho no es emancipatorio o Contra-hegemónico, sino que se deben analizar los casos en concreto y sus particularidades para el uso de herramientas jurídicas, pero también se debe tener un horizonte más amplio y emancipadores
2. Buscar casos similares que hayan tenido éxito en el contexto internacional con el propósito de intercambiar estrategias, problemas, soluciones, entre otras.
3. Reconocer las limitaciones del derecho como factor de cambio social, pero no por ello, desconocer que puede generar cierta modificación y reivindicación de derechos.
4. Tener en cuenta los actuales acuerdos de paz firmados por el Gobierno y las FARC como factor a desarrollar dentro de las políticas del MOVICE,
5. Luchar por la creación de espacios contra-hegemónicos donde tenga la libertad de definir, modificar y ejecutar acciones transcendentales para el universo de Víctimas en Colombia.

BIBLIOGRAFÍA

Alcañiz, Mercedes. (2010) Manual de cambio social y movimientos sociales, Publicacions de la Universitat Jaume 2010, Castellón de la Plana

Puga, Mariela (2012). Litigio y cambio social en Argentina y Colombia. - 1a ed. – Buenos Aires: CLACSO.

Jelin, Elizabeth. Más allá de la nación: Las escalas múltiples de los movimientos sociales. 2003, Buenos Aires, Libros del Zorzal.

Balakrishnan, Rajagopal. El Derecho Internacional Desde Abajo El Desarrollo, Los Movimientos Sociales Y La Resistencia Del Tercer Mundo, 2005, Ediciones Antropos

Souza, María De Lourdes. Del uso alternativo del derecho al garantismo: una

evolución paradójica, Universidad de León, 1998

Kotler, Rubén Isidoro. Los Movimientos Sociales: Formas De Resistencia A La Dictadura, Publicado por el Programa de Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires. Referencias: Cuadernos de Historia Oral N° 7, Universidad de Buenos Aires, 2006, Buenos Aires.

Red de Defensores No Institucionalizados. Litigio Estratégico: Aportes a la construcción para graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. 2012, Gente Nueva Editorial.

Martí I Puig, Salvador. Los movimientos sociales en un mundo globalizado: ¿alguna novedad? América Latina Hoy, núm. 36, abril, 2004, pp. 79-100 Universidad de Salamanca, Salamanca, España.

Alcañiz, Mercedes. Manual de Cambio Social y Movimientos Sociales, Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions Campus del Riu Sec. Edifici Rectorat i Serveis Centrals, 2010.

Manzano, Virginia. 2004. Movimiento social y protesta social desde una perspectiva antropológica. Ficha de cátedra, Antropología Sistemática cátedra Neufeld, Facultad de Filosofía y letras, Universidad de Buenos Aires. 2004

Tarrow, Sidney. El Poder En Movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. 1997, Editorial Alianza.

Alexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. 1993. Madrid

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE. (2014). Informe De La Ley De Víctimas Tres Años De Lenta Implementación. Bogotá D.C.

Tenthoff, Moritz (2015). Estructuras Criminales al Interior del Estado Colombiano. Bogotá. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE. Paz Sin Crímenes de Estado. 2013. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE. Revictimización a las Víctimas de Crímenes de Estado. 2012. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Estado, M. N. (2015). Estructuras Criminales al Interior del Estado Colombiano. Bogotá.

Human Rights Watch. (2013). El Riesgo de Volver a Casa. Estados Unidos de América.

María Paula Saffon, Mauricio García-Villegas (2011). Derechos sociales y activismo judicial. La dimensión fáctica del activismo judicial en derechos sociales en Colombia Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 13, núm. 1, enero-junio, pp. 75

Zuleta, Estanislao (2003). Colombia: Violencia, democracia y derechos humanos. Medellín: Hombre Nuevo Editores, Fundación Estanislao Zuleta.

Raschke, Joachim (1994). Sobre el concepto de movimiento social. Madrid. Asociación de Revistas Culturales de España.

Herrera Zagaib, Miguel Ángel (2005). Seguridad y gobernabilidad democrática, neo presidencialismo y participación en Colombia 1991-2003. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Bogotá, Universidad Nacional.

Cinep (2004). Base de datos de derechos humanos y violencia política <http://www.nocheyniebla.org/taxonomy/term/26>

Crocco, Natalia (2012). La realización simbólica del genocidio: el Juicio a las Juntas y una mirada del pasado desde el “pasado”. Buenos Aires. Revista Pensamiento Penal.

Giraldo, J. (año). Búsqueda de verdad y justicia: seis experiencias en Postconflicto. Bogotá: Cinep.

Carvajal Martínez, Jorge Enrique (2015) Los fallos de la Corte Interamericana de

derechos humanos: Colombia y la mirada de la justicia internacional, Revista Prolegómenos

López, Clara (2010). La Refundación de la Patria, de la teoría a la evidencia, ... De cómo los mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado Colombiano, Bogotá: Debate.

Saffon, María Paula, García-Villegas, Mauricio, "Derechos sociales y activismo judicial. La dimensión fáctica del activismo judicial en derechos sociales en Colombia", Revista Estudios Socio-Jurídicos, 2011, 13, (1), pp. 75-107.

Rauber, Isabel. Movimientos sociales, género y alternativas populares en Latinoamérica y El Caribe, Institut Universitaire D'études Du Développement Service des publications, 2005, Ginebra.

Touraine, Alan (2006). Los Movimientos Sociales. Revista Colombiana de Sociología

López Saldarriaga Henry, Graciano Jaramillo Sonia Isabel & Peláez Vélez Isabel Cristina. Movimientos Sociales Y Constitución Política De 1991: Caminos De Ilusión Hacia La Construcción De Una Ciudadanía En Colombia. Facultad De Educación Y Pedagogía, Universidad de Antioquia. 2009

Mora Lemus, Giovanni. Memorias, Pluralidad Y Movimiento Social: La Experiencia Del Movice. Facultad De Ciencias Políticas Y Relaciones Internacionales Maestría De Estudios Políticos. Pontificia Universidad Javeriana. 2010

Herrera Varela, Alexander. Memoria Colectiva y Procesos de Identidad Social en el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Facultad de Derecho, Ciencias

Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia. 2008

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2013). Verdad, Justicia y Reparación: Cuatro Informes Sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia. Organización de los Estados Americanos.

Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. (2015). Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá D.C.

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia. (14 de Abril de 2016). Centro de Noticias ONU. Obtenido de <http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34860>

Informe de Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones del relator especial de la Naciones Unidas sobre los derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas (2005-2008) 2009, <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8057.pdf?view=1>

El Estado colombiano es responsable de genocidio político y del exterminio sistemático de organizaciones Sociales, MOVICE. Bogotá, julio 26, 27 y 28 de 2007

Humanos, O. e. (2005). Consideraciones Sobre la Ley de Justicia y Paz. Bogotá D.C.

Sentencia Masacre de Mapiripan (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2005).

Sentencia 19 comerciantes (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2005).

Sentencia Masacre de la Rochela (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2005)

Sentencia Masacre de Pueblo Bello (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2005)

Sentencia C-250 de 2012 (Corte Constitucional 2012).

Mónica Bruckmann, Theotonio Dos Santos. (2008). LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMERICA LATINA: UN BALANCE

OSCAR CORREAS. LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA. UN ENSAYO DE DEFINICIÓN. Biblioteca jurídica Virtual del Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. Puede ser consultado en:

<https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/critica-juridica/article/viewFile/3076/2876>
HISTORICO. 2017, de cetri Sitio web: <http://www.cetri.be/Los-movimientos-sociales-en?lang=fr>

Sentencia C-253A de 2012 (Corte Constitucional 2012).

Sentencia C-370 de 2006 (Corte Constitucional 2006).

MOVICE, I. (marzo de 2016). (J. Zamudio, Entrevistador)

Fiscalía General de la Nación. Respuesta al derecho de petición radicado por el MOVICE el 8 de agosto de 2014. Radicado No. 2014-100-001181-3